



# Apuntes ICSE 2023 - resumen isce uba xxi 2023 Catedra: Pedrosa

Sociedad y Estado Uba xxi (Universidad de Buenos Aires)



Escanea para abrir en Studocu

# ***Texto: Herramientas para el análisis de la sociedad y el Estado (Pedrosa)***



## ***Capítulo 1 “La sociedad, el estado y las instituciones”***

- ❖ ¿Qué es la sociedad?
- ❖ ¿Qué rol cumplen las instituciones entre la sociedad y los individuos?
- ❖ ¿Qué son las instituciones formales e informales?
- ❖ ¿Qué relación existe entre la sociedad y el Estado?
- ❖ ¿Cuál es la relación entre el individuo y el Estado? ¿Qué es una sociedad civil?

### **La sociedad**

Uno de los primeros pensadores en preguntarse sobre el orden social fue el sociólogo *Emile Durkheim*. Desde su perspectiva, la sociedad es una totalidad sui generis, es decir, que significa algo más que la mera suma de individuos, es un fenómeno diferente. Vivir juntos, establecer lazos y relaciones sociales hace que se conforme algo mayor y más grande que la sumatoria de individualidades. A partir de esta noción, *Durkheim* propuso la noción de “hecho social” como formas de hacer, sentir y pensar que al individuo se le presentan desde afuera y que se siente obligado a cumplir. Lo que mantiene unida a la sociedad son los hechos sociales. Asumimos normas que pautan nuestras interacciones y nuestros comportamientos. Nos sentimos obligados a cumplirlas y, si no lo hacemos, podemos recibir una sanción. Para *Durkheim*, la sociedad es la que impone al individuo una moral, que define como las reglas que rigen las relaciones y establecen lo que está permitido y lo que no.

### **Las instituciones**

La sociedad impone sobre el individuo las reglas que pautan los comportamientos a través de las instituciones. Según el politólogo *Guillermo O'Donnell*, las instituciones son pautas -leyes, códigos, estatutos, constituciones, organismos del estado o comportamientos establecidos culturalmente- que instauran y regulan la interacción entre las personas y los grupos que componen una sociedad. Cumplen tres roles principales; ordenar, guiar y regular las conductas sociales.

#### **Características de las instituciones:**

- ★ Eficaces, intersubjetivas y pueden cumplir simultáneamente varias funciones: Es eficaz ya que generan un poderoso efecto, el orden, a través de la construcción de un sentido común sobre cómo deben ser las cosas y la regulación de las expectativas de las personas (esto permite que las personas vivan las interacciones sociales de su día a día sin cuestionar las acciones que llevan adelante). Son

intersubjetivas, es decir todos los miembros de un grupo las conocen y respetan. Las instituciones pueden ser clasificadas según varios criterios y uno de ellos está relacionado con los objetivos que persiguen: hay instituciones sociales, culturales, educativas, políticas, etc. Pero una misma institución puede cumplir más de una función.

- ★ Se desarrollan en un juego o una tensión entre la permanencia en el tiempo y el cambio, entre la estructuración y la reestructuración: Las instituciones tienden a ser estables en el tiempo lo que permite que la sociedad las conozca y reconozca, y así puedan cumplir sus funciones. Si en una sociedad las instituciones que la ordenan cambiarán todo el tiempo, los distintos actores no sabrían a qué atenerse. Por ello, la previsibilidad, presente y futura, es una de las características que las define y las vuelve poderosas. Pero ello no significa que sean inmutables o estáticas, a pesar de la búsqueda de estabilidad, las instituciones cambian, en general de forma lenta, porque las sociedades transforman sus modos de pensar, sus valores, demandas y representaciones.
- ★ Pueden clasificarse en formales e informales: Las formales están escritas y codificadas a través de leyes y reglamentaciones diversas, cuya elaboración está vinculada a espacios legítimos como los tres poderes que conforman el Estado y su cumplimiento trae aparejadas sanciones, públicamente conocidas, por parte del Estado y sus agencias particulares. Las informales son normas y conductas que, aunque son conocidas por todos, no están entre las previstas por las leyes y la formalidad del Estado. Se trata de normas aceptadas, conocidas, establecidas e igual de efectivas, que no están escritas ni tienen origen en los tres poderes del Estado. También generan sanciones, aunque no estén escritas. Ejemplo: normas que rigen en una vecindad, de amistad, religiosas, etc. Algunas prácticas ilegales, como la corrupción, pueden transformarse en una institución informal, cuando se sostienen y repiten en el tiempo. Las instituciones formales e informales funcionan simultáneamente y no son excluyentes.

## La sociedad y el Estado

La sociedad está compuesta por personas cuya interacción está regulada por las instituciones, tanto formales como informales. En cambio, el Estado es una asociación que busca dominar mediante el uso de la fuerza legítima a una sociedad. El Estado y la sociedad son dos espacios distintos que se relacionan de forma diversa y compleja. Dicha complejidad está dada por la gran heterogeneidad de actores, grupos sociales y políticos que buscan cumplir sus objetivos y proteger sus intereses y, al mismo tiempo, evitar que otros lo hagan.

Las instituciones juegan un papel fundamental en esta relación, ya que regulan la construcción del poder social de un país. Ordenan, regulan y determinan lo que se puede hacer y lo que no, y prevén castigo a quienes no cumplan las reglas, también regula quién gana, cuánto poder poseerá, cuáles serán sus límites y quienes se los impondrán.

La lucha por controlar las instituciones es constante, ya que quien lo hace tiene mayores posibilidades de volcarlas a su favor. Esta lucha es lucha por el poder, y genera conflictos en la sociedad y su relación con el Estado. El hecho de que el Estado tenga el control no implica indefectiblemente que la sociedad sea, o deba ser, controlada. Puede ocurrir que

algunos actores se resisten a que el Estado les imponga alguna determinación. Pueden, a su vez, organizarse y defender sus derechos, a través de instituciones políticas, como los partidos políticos o las organizaciones no gubernamentales. Pueden, incluso, utilizar las mismas instituciones estatales a su favor, como, por ejemplo, la presentación de recursos de amparo ante la Justicia.

## Los individuos y el Estado

El estado tiene características que lo distinguen de otras, principalmente el monopolio legítimo de la violencia. Si pensamos en la relación Estado-Individuo desde perspectivas sociológicas clásicas como la durkheimiana, la supremacía del Estado y de la sociedad sobre el individuo es muy clara, y por eso se la denomina determinista.

Otras perspectivas, en cambio, enfatizan el proceso de individualización, que sucedió durante la modernidad, es decir, que cada vez más las personas se perciben como individuos, ya no como personas pertenecientes a una comunidad que los contiene y los limita. Frente a estas perspectivas y proceso de individuación, los individuos se repliegan puesto que sienten no tener injerencia en los asuntos públicos. En este proceso de individuación, el rol de los ciudadanos quedaría entonces reducido.

Esta tendencia a replegarse fue señalada de forma crítica por *Tocqueville*, en el siglo XIX, ya que consideraba deseable para los sistemas democráticos que los ciudadanos participen de organizaciones intermedias, entre el Estado y la sociedad. De esa manera podrían no aislarse, fomentar el interés en los asuntos públicos e incrementar la calidad institucional de la democracia.

La sociedad civil, es el entramado generado desde la ciudadanía para impulsar diversos objetivos, defender intereses y derechos, sobre todo, frente a la intervención del Estado de ampliar su dominación. Las organizaciones y redes de la sociedad civil pueden ser también formales e informales, y no pertenecen al Estado (aunque este puede regularlas) ni a las organizaciones políticas, pero fomentan la participación en la esfera pública de los ciudadanos. La sociedad civil vigoriza la calidad de la democracia puesto que es una forma de vincular a los ciudadanos con los asuntos públicos.

Diversos objetivos posibles de una sociedad civil:

- Defensa de los derechos y las leyes que el Estado reconoce o ha sancionado, pero que por diversas razones no se garantiza su ejercicio y cumplimiento.
- Concreción de funciones que el Estado no estuviera realizando en temas de interés primario de la sociedad, como por ejemplo salud, seguridad, educación.
- Ampliación de la constitución moral de la sociedad impulsando y visibilizando nuevas problemáticas. Por ejemplo, organizaciones que sensibilizan sobre la violencia de género.
- Fomento de diversos intereses de la ciudadanía, sean culturales, deportivos o religiosos.

Algunos ejemplos de instituciones de sociedad civil; organismos de defensa de los derechos humanos, de los animales, de protección del medio ambiente.



## Capítulo 2 “El hombre y la cosa”

- ❖ Origen y necesidad del Estado.
- ❖ Definición y conceptualización de Estado, de Max Weber.
- ❖ Articulación entre sociedad y Estado. Noción de legitimidad.
- ❖ Niveles de estatalidad y la relación con los gobiernos.

### El estado: origen histórico y formulación teórica

La aparición del Estado, como actor histórico, marca un antes y un después en el desarrollo de las sociedades humanas. Es el Estado el que impone las leyes, es decir, las hace cumplir.

El Estado es una creación humana. Antes de que se conformara un Estado, las personas vivían en lo que se ha dado en llamar “estado de naturaleza” es decir, no habían leyes que organizaran la vida humana y el más fuerte lograba imponerse sobre el más débil. Las sociedades que no tenían Estado, convinieron en la existencia de algún orden que les garantizara más poder y seguridad, así se originó el Estado. Mediante este acuerdo, los miembros de la sociedad renunciaron a varias de sus prácticas habituales (por ejemplo, la defensa por mano propia) en favor de la creación de una nueva estructura que serviría para defenderlos de agresiones externas.

Uno de los primeros avances en la tarea para definir al Estado lo dio el filósofo *Hobbes*, quien sostenía que el Estado surgió a través de un acuerdo efectuado entre todos los habitantes de un territorio. Él sostenía que durante el tiempo en que se vivía sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra, una guerra tal que es de todos contra todos. La aparición del Estado permite controlar la guerra y, por lo tanto, poner freno a la destrucción descontrolada y la disgregación social.

La capacidad del Estado debe entenderse en sentido amplio, no limitada a la protección de la vida, sino también al de los bienes materiales, dado que concibe para el rol del estado “el brindar seguridad a todas las excelencias que el hombre puede adquirir legalmente, sin daño para el estado, mediante la promulgación y ejecución de leyes, que las personas individuales puedan aplicar a sus propios casos” (*Hobbes*)

### Definición de Estado, de Max Weber

El sociólogo *Weber*, elaboró una definición de Estado, la cual fue muy importante a principios del siglo XX. Las definiciones de Estado fueron cambiando con los aportes de otros científicos sociales y nuevas escuelas de pensamiento, así como por el aumento de la complejidad de los Estados y sociedades a lo largo del tiempo. Sin embargo, la definición propuesta por Weber aún permanece vigente, ya que señala algunas características básicas sobre lo que define a un Estado y su acción.

Según *Max Weber*, el Estado es una comunidad humana que reclama el monopolio de la violencia física legítima dentro de un territorio específico. *Weber* destaca dos elementos

cruciales en su definición; primero, el Estado debe tener el control absoluto sobre un territorio, y segundo, debe ser la única entidad autorizada para ejercer la violencia legítima dentro de ese territorio. La “violencia legítima” se refiere al uso de la fuerza que está regulado y respaldado por la ley. Solo al Estado se le concede el derecho exclusivo de ejercer esta violencia. Por ejemplo, las fuerzas policiales y los cuerpos armados del Estado son los que normalmente ejercen esta violencia legítima.

## El Estado y la dominación

El Estado no representa a toda la sociedad, ya que esta es diversa y conflictiva, lo que también se refleja en su estructura interna. A veces, los conflictos persisten dentro del Estado mismo, con funcionarios que representan intereses diversos. A pesar de esto, el control del Estado permanece en manos de algunos grupos, pero se busca que actúe en interés de toda la sociedad, aunque esto sea complicado.

La diferencia entre la dominación y el poder es la legitimidad, la dominación es legítima, es la capacidad de encontrar en el otro un mandato de obediencia a mi autoridad. El poder es imponer la voluntad frente a cualquier resistencia.

*Weber* señala cómo el Estado logra ejercer su dominación efectivamente, y destaca que lo importante no son los objetivos o el tipo de dominación que busca, sino los medios que emplea para ejercerla. La coacción física, la violencia, es el medio principal que utiliza el Estado para dominar, y lo hace de manera legítima y exclusiva. Sin embargo, la violencia por sí sola no basta para explicar el control del Estado sobre la sociedad.

Para ser eficaz, la violencia estatal debe ser aceptada por los ciudadanos y estar respaldada por la legalidad, es decir, estar establecida en las leyes. Esto implica que la violencia debe ser regulada y legítima según las normas legales que el Estado establece. Según *Weber*, el monopolio de la violencia y la legitimidad están intrínsecamente vinculados y son fundamentales para la dominación estatal.

## Legitimaciones de la dominación del Estado

*Weber* exploró las razones detrás de la obediencia al Estado a lo largo de diferentes épocas y propuso una clasificación para entender la legitimidad de la dominación estatal. Esta clasificación se basa en tres tipos: legitimidad tradicional, carismática y legal.

- Legitimidad basada en el eterno ayer: La legitimidad tradicional se basa en la costumbre. En este caso, la obediencia ocurre sin cuestionamientos, ya que se sigue lo tradicional sin reflexión consciente sobre la acción.
- Legitimidad del carisma personal: La legitimidad carismática se sustenta en el carisma personal del líder. A lo largo de la historia, individuos con habilidades de liderazgo, inteligencia o magnetismo han convencido a grupos enteros de obedecer sus reglas. Aquí, el carisma del líder es el fundamento principal que justifica la dominación. Weber se centró en este aspecto, investigando cómo el carisma ligado al liderazgo personal, como el de un caudillo, influía en la obediencia de las personas. El carisma permite que ciertos grupos sigan a un líder incluso si va en contra de la costumbre o la norma legal.

→ Legitimidad de la legalidad: La legitimidad legal está basada en normas racionales y leyes creadas por la sociedad. Las sociedades occidentales se rigen por leyes escritas que sitúan al Estado como árbitro entre diferentes grupos. La racionalización colectiva de comportamientos es un factor clave en la civilización occidental.

## Estado, gobierno y nación

Bajo el concepto del Estado nacional, se presentan diversos niveles de estatalidad, como los Estados provinciales y municipales, cada uno con un grado de autonomía y atribuciones específicas. Esta descentralización de poder permite una administración más ajustada a las necesidades locales y una distribución de responsabilidades más efectiva.

Distinguir entre Estado y gobierno resulta crucial. El Estado, una estructura permanente, se diferencia del gobierno, que está conformado por individuos que ejercen temporalmente la administración del Estado. Los miembros del gobierno tienen mandatos limitados y son relevados por nuevos administradores al final de sus términos.

Otra distinción relevante es la que se establece entre Estado y nación. Según *Gellner*, la formación de una nación implica fases culturales y voluntaristas. La fase cultural se basa en individuos que comparten una cultura y conjunto de valores, mientras que la fase voluntarista considera a una nación como aquel grupo que reconoce mutuamente sus deberes y derechos como miembros.

A pesar de que los Estados a menudo emergen a partir de comunidades nacionales, no todas las naciones cuentan con un Estado propio. En el caso de Argentina, la construcción de la nación siguió a la creación del Estado. Mediante políticas públicas, especialmente en el ámbito educativo, se forjó la identidad nacional. Este ejemplo destaca cómo el Estado puede ser un factor central en la creación y unión de identidades nacionales en sociedades modernas.



## **Capítulo 3 “Tipos de Estados”**

- ❖ Estado liberal.
- ❖ Estado fascista.
- ❖ Estado de bienestar o benefactor.
- ❖ Estado neoliberal.
- ❖ Tipos de Estados en América Latina.

### Estado liberal

El Estado liberal emerge como una filosofía política en oposición al poder absoluto (estado absolutista) (monarca absoluto que gobernaba sin límites). Conlleva el concepto de libertad, razón, respeto por la vida privada y el constitucionalismo.

El Estado liberal está basado en dos ideas, por un lado el contractualismo y por el otro el constitucionalismo. El contractualismo es la idea filosófico-política, a partir de la cual

todos los ciudadanos se juntan y deciden formar un estado, y a partir de este esta otorgarle ciertas características y responsabilidades para que lleve a cabo y ordene nuestra vida social. El constitucionalismo es la idea de que debe existir una norma que supere al poder absoluto de una sola persona, de esta manera, la constitución divide el poder en 3 (Poder ejecutivo, legislativo y judicial). Es decir, en el ámbito político, la legitimidad de los gobernantes se basa en elecciones regulares respaldadas por leyes y constituciones. El Estado liberal busca contrarrestar el despotismo a través de la separación de poderes.

El Estado liberal pone énfasis en la libertad del individuo, el respeto al individuo como un sujeto político, de derechos y obligaciones.

Implicó también un avance de la clase burguesa sobre la nobleza, es decir, la nueva clase dominante sería la burguesía (clase capitalista). Además, este proceso conduce a una secularización social (proceso mediante el cual las influencias religiosas y espirituales disminuyen en la sociedad y en diversos aspectos de la vida cotidiana) Se produce un cambio en la relación entre la Iglesia y el Estado, ya que el liberalismo propició la disminución del monopolio eclesiástico sobre la educación y la cultura. Es decir, separa el ámbito de lo civil y lo religioso.

El Estado liberal defiende los derechos naturales, indivisibles e inalienables, como la igualdad, la libertad y la propiedad privada. Estos derechos son inherentes al ser humano en su estado anterior a la formación de la sociedad. Para proteger estos derechos, las personas acuerdan vivir en sociedad y establecer un Estado limitado en su propensión a ejercer dominio sobre la sociedad.

En la esfera económica, el Estado liberal se basa en leyes naturales del mercado, como la oferta y la demanda, así como en la libre competencia. La iniciativa individual y la búsqueda de lucro son consideradas fuerzas que impulsan el beneficio personal y el progreso social. El Estado asume un papel mínimo en la economía, permitiendo que los mercados operen con autonomía. Se encarga de mantener la seguridad externa y personal, así como de proyectos de infraestructura pública y educación elemental. Es decir, propone un libre comercio, donde el Estado no debe intervenir en la economía, dejando que el mercado de autorregule y operen con autonomía.

## Estado fascista

El fascismo es un movimiento político totalitario, ya que pretende dominar de manera total a la sociedad (control social), antidemocrático y autoritario. Surgió en Europa en las primeras décadas del siglo XX, representado por líderes como *Benito Mussolini* (considerado creador de lo que luego se llamó facismo) en Italia y *Adolf Hitler* en Alemania. Este Estado surge como respuesta a la crisis del liberalismo, por la incapacidad que posee la incipiente democracia en satisfacer las necesidades que planteaba el resto de la población, y también frente al miedo de la extensión del comunismo.

Aunque los regímenes fascistas tienen diferencias, comparten ciertos rasgos comunes que permiten una comprensión general.

### Características del Estado Fascista:



- ★ Control total del Estado: El Estado fascista ejerce un control absoluto sobre todos los aspectos de la sociedad. No hay límites en el poder estatal, y el gobierno está involucrado en todas las esferas de la vida pública y privada.
- ★ Culto al líder: Se promueve un fuerte culto al líder. El líder es visto como un héroe carismático cuyo liderazgo es inapelable. La autoridad del líder es central en la política y la sociedad. Este culto al héroe va de la mano de un ideal militarista, de expansión militar (invasiones)
- ★ Misticismo y nacionalismo: A menudo tienen un componente místico, con un énfasis en el heroísmo y la voluntad. El nacionalismo extremo es un elemento clave, con la idea de que la nación es superior a otras y que la expansión territorial es un objetivo deseable. El fascismo utiliza como herramienta política el nacionalismo.
- ★ Propaganda y uso de la fuerza: La propaganda juega un papel esencial en el fascismo, utilizándose para promover la ideología del régimen y justificar acciones autoritarias. La represión y el uso de la fuerza, tanto legal como ilegal, son comunes para silenciar la oposición.
- ★ Reacción al comunismo: El surgimiento del fascismo en Europa se relaciona en parte con el miedo al comunismo y la Revolución Rusa. El comunismo representaba una amenaza para las propiedades y el poder de la élite, lo que llevó a buscar líderes fuertes que pudieran combatir esta amenaza.
- ★ Rechazo a la democracia liberal: Los regímenes fascistas rechazaban la democracia liberal, considerándola incapaz de abordar los desafíos y problemas de la sociedad. Argumentaban que la democracia no podría detener la revolución social ni garantizar la seguridad del país.
- ★ Rivalidad con países vecinos: El nacionalismo en el fascismo a menudo llevaba a la rivalidad con países vecinos. El discurso fascista promovía la idea de enemigos externos e internos que debían ser vencidos por la fuerza en busca de grandeza nacional.
- ★ Discurso policlasista: El discurso fascista se dirigía a diferentes sectores sociales, ofreciendo promesas contradictorias. A los trabajadores prometía mejoras en condiciones de vida y dignidad laboral, mientras que a los patrones les aseguraba restaurar el orden y la jerarquía social autoritariamente.

### Estado de bienestar o benefactor

El Estado de Bienestar o Benefactor se desarrolló en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, como una respuesta a los efectos económicos y sociales de la guerra y los costos de reconstrucción. Surgió como una alternativa al Estado liberal, buscando abordar desafíos como el crecimiento económico y la estabilidad social frente al avance del comunismo.

Es un tipo de estado que propone, a diferencia del estado liberal, que el estado debe intervenir fuertemente en materia económica. El estado debe fomentar políticas anticíclicas (políticas que combatan las crisis económicas). Busca retomar la senda del crecimiento y de la seguridad (combatir la idea comunista).

#### Características del Estado de Bienestar:

- ★ Garantía de vida y estabilidad social: El Estado de Bienestar se orienta hacia la protección de la población desde la infancia hasta la vejez, evitando crisis recurrentes del sistema capitalista. Se promueven transferencias sociales mediante seguros de desempleo y pensiones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
- ★ Pleno empleo y altos salarios: Una característica fundamental es la búsqueda y mantenimiento de altos niveles de ocupación, buscando el pleno empleo. Además, se promueven salarios altos para mantener la producción y el crecimiento económico.
- ★ Gasto público y servicios sociales: El Estado de Bienestar expande el gasto público, especialmente en gasto social. Ofrece servicios como educación, salud, previsión social y jubilaciones. También promueve la legislación que protege las condiciones laborales y la calidad de los servicios.
- ★ Intervención económica: El Estado de Bienestar es interventor y regulador en la economía. Grava la rentabilidad de las empresas y sectores económicamente dominantes para lograr una distribución más equitativa de la riqueza. Puede participar como empresario y promover una economía mixta.
- ★ Intermediación en relaciones laborales: Busca mediar entre fuerzas capitalistas y laborales, interviniendo como árbitro y constructor del consenso. El movimiento obrero acepta ciertas relaciones de producción a cambio de garantías de redistribución, seguridad y bienestar.
- ★ Expansión de derechos sociales y políticos: El Estado de Bienestar amplía derechos sociales y políticos. Contribuye al crecimiento de la población, reducción del analfabetismo y aumento de la matrícula educativa. También estimula la participación de las mujeres en el mercado laboral y la educación superior.
- ★ Crisis y cuestionamientos: A partir de la década de 1970, la crisis económica y el aumento de los costos de producción, especialmente por la crisis del petróleo, generaron cuestionamientos al Estado de Bienestar. El gasto social y las intervenciones estatales fueron criticados por su impacto económico.
- ★ Crisis energética y cambios en la política internacional: La crisis del petróleo y los costos de la carrera armamentista de la Guerra Fría llevaron a recortar gastos en defensa europea. Los países europeos vieron crecer sus déficits fiscales y enfrentaron dificultades para mantener el bienestar.

El Estado de Bienestar generó transformaciones positivas en la sociedad, incluyendo el crecimiento de la población, avances en la educación, mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral y expansión de derechos. Sin embargo, la década de 1970 trajo consigo una crisis económica que cuestionó su viabilidad y condujo a la búsqueda de nuevas formas de organización estatal.

## Estado neoliberal

En la década de 1990, la caída del comunismo y la desaparición de la Unión Soviética marcaron un cambio de paradigma en la concepción del Estado. Además, la globalización y los avances tecnológicos transformaron la economía mundial y disminuyeron la importancia de las fronteras nacionales. El Estado neoliberal surge a partir de una crisis del estado benefactor, cuando el Estado que otorgaba derechos sociales muy amplios ya no los

podía financiar y no se podía sostener ese nivel de gasto público. Propone una vuelta a políticas liberales, criticando el estado benefactor, y propone desregular la economía, apertura de la misma, y descentralizarla.

### Características del Estado Neoliberal

- ★ Reducción del papel del estado: El neoliberalismo enfatiza la necesidad de reducir la intervención del Estado en la economía y en la vida social. Busca un menor control gubernamental.
- ★ Énfasis en el mercado: Se considera que el mercado es el mejor asignador de recursos y se promueve trasladar las decisiones económicas a él. El mercado se ve como eficiente y capaz de regularse a sí mismo.
- ★ Eliminación de regulaciones estatales: El neoliberalismo propone la eliminación de regulaciones y restricciones gubernamentales que puedan obstaculizar el crecimiento económico. Esto incluye tanto regulaciones comerciales como laborales.
- ★ Apertura económica: Se promueve la apertura de la economía a nivel internacional, eliminando barreras comerciales y permitiendo la libre circulación de bienes y servicios entre países.
- ★ Privatización de empresas públicas: Fomenta la privatización de empresas estatales, buscando reducir el gasto público y permitir que el sector privado asuma roles previamente desempeñados por el gobierno.

Objetivos y Resultados: El neoliberalismo busca impulsar la innovación privada, aumentar la inversión extranjera y estimular la economía. Sin embargo, su aplicación sin considerar otras variables puede llevar a la concentración de poder y a desigualdades económicas.

En resumen, el Estado neoliberal se caracteriza por reducir la intervención estatal en la economía y la sociedad, promoviendo la primacía del mercado y la apertura económica. Busca la privatización de empresas estatales, la desgravación financiera y la flexibilización laboral, con el objetivo de atraer inversiones y aumentar la eficiencia económica. Aunque se enfoca en el crecimiento económico, su impacto puede generar desafíos sociales y desigualdades si no se aborda con precaución.

### Tipos de Estados en América Latina

El Estado de bienestar, que se formó principalmente en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un enfoque diferente en América Latina. Mientras en Europa buscaba ser un mediador y proveedor de servicios sociales para mejorar la calidad de vida, en América Latina, incluyendo Argentina, tuvo un desarrollo incompleto debido a varios factores. Estos factores incluyen la falta de financiamiento externo y la falta de consenso sobre la necesidad de un Estado inclusivo.

En América Latina, especialmente en Argentina, el Estado de bienestar surgió a través de luchas y conflictos en lugar de consensos. En contraste con Europa, donde se buscaba un bienestar básico para todos, en América Latina los trabajadores tuvieron que enfrentar gobiernos conservadores para lograr mejoras en sus condiciones. Esto se vio reflejado en líderes como *Yrigoyen*, *Alvear* y *Perón*.

En esta región, surgió la idea de que los beneficios otorgados a un grupo podrían ser percibidos como pérdidas por otros. En Argentina, el neoliberalismo se consolidó bajo el gobierno de *Carlos Menem*, y otros líderes en América Latina como *Alberto Lacalle*, *Alberto Fujimori*, *Arnoldo Alemán* y *Carlos Salinas de Gortari* también implementaron políticas neoliberales.

## **Capítulo 4 “Régimen político”**

- ❖ Definición de régimen político y poder.
- ❖ Tipos de régimen político.
- ❖ Régimen político con adjetivos.
- ❖ Regímenes híbridos.
- ❖ Cómo se transforma de un régimen político a otro.

### Régimen político

La palabra “régimen” tiene muchos significados. En general, es entendida como un conjunto de reglamentaciones que determinan el funcionamiento de un proceso o sistema. Pero también está cargada de un sentido peyorativo, utilizada para definir dictaduras, autoritarismos y totalitarismos. El concepto de “régimen político” en la ciencia política hace referencia al conjunto de reglamentaciones que determinan cómo se accede, y cómo se ejerce el poder. La palabra “Poder” es un concepto polisémico (posee varias definiciones), aquí se tomará la concepción weberiana, que lo asimila a la idea de dominación, es decir, la obediencia voluntaria de una sociedad a sus líderes.

La distinción entre sistema político y régimen político radica en su nivel de abstracción. El sistema político, que es la dimensión más amplia, engloba tanto la estructura política como la económica de cualquier sociedad. La dimensión económica se encarga de determinar cómo se produce y distribuye la riqueza dentro del sistema, mientras que la dimensión del régimen político se ocupa de establecer cómo los ciudadanos interactúan con el Estado. En resumen, el sistema político abarca tanto los aspectos económicos como políticos de una sociedad, mientras que el régimen político se centra en la relación entre los ciudadanos y el Estado.



### Tipos de regímenes políticos

Las tipologías que se elaboran de los regímenes políticos suelen utilizar dos categorías mutuamente excluyentes como extremos de un continuo: democracia y autoritarismo. La definición que se tome de democracia modificará la de autoritarismo y viceversa. Entre ambos tipos existen variantes que se definen por la ausencia de algunas de las características de los tipos extremos.

### Democracia

La democracia es un tipo ideal de régimen político que se encuentra en un extremo del espectro político. En un sistema democrático, el acceso y el ejercicio del poder están limitados por una serie de características fundamentales:

- ★ Elecciones libres y justas: el acceso al poder se logra a través de elecciones abiertas y equitativas en las cuales los ciudadanos eligen a sus representantes legislativos y ejecutivos.
- ★ Estado de derecho: existe un marco legal que establece los derechos y responsabilidades de los ciudadanos y del gobierno. Además, se garantiza la independencia del sistema judicial para asegurar el respeto a la ley.
- ★ División de poderes: los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) están separados y operan independientemente unos de otros. Esto previene la concentración excesiva de poder en manos de una sola entidad.
- ★ Derechos civiles y políticos: los ciudadanos gozan de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a asociarse y reunirse pacíficamente, y el derecho al voto.
- ★ Control de actores externos: las fuerzas armadas y otros actores no pueden intervenir de manera legítima en el gobierno, evitando así que el poder se concentre en manos de una minoría.

### Autoritarismo

El autoritarismo es un tipo de régimen político opuesto a la democracia y se caracteriza por una serie de rasgos que permiten el ejercicio del poder sin restricciones democráticas:

- ★ Acceso no democrático al poder: quienes gobiernan no son representantes elegidos por los ciudadanos, sino que llegan al poder mediante medios no democráticos, como golpes de Estado o nombramientos internos en partidos o líneas de sucesión monárquica.
- ★ Falta de estado de derecho: el sistema legal puede ser manipulado o ignorado por los gobernantes, lo que resulta en la falta de garantías legales para los ciudadanos y la concentración de poder en manos de un pequeño grupo.
- ★ Concentración de poder: no existe una división real de poderes. En muchos casos, el poder ejecutivo controla al legislativo y al judicial, lo que permite al gobierno tomar decisiones sin control efectivo.
- ★ Restricciones a los derechos: los ciudadanos pueden enfrentar restricciones en sus derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la libertad de prensa. El gobierno puede censurar información y limitar las actividades de oposición.

- ★ Intervención de actores externos: fuerzas militares o grupos externos pueden ejercer influencia sobre el gobierno, lo que puede elevar a un gobierno represivo y la ausencia de control ciudadano.

## Régimen político con adjetivos

A partir de los grandes conceptos generales deben construirse otros, más específicos y explicativos, a los que la ciencia política ha llamado “régimenes políticos con adjetivos”.

Dentro de los subtipos de régimenes políticos existen diversas categorías, como la poliarquía, la democracia delegativa y la dictadura. Estos subtipos son variantes específicas de los conceptos generales de democracia y autoritarismo.

### Democracia delegativa:

La democracia delegativa es un subtipo de democracia en el que la mayoría de los indicadores coinciden con los valores de una democracia típica, como elecciones libres y garantías de libertades políticas. Sin embargo, existe una característica clave que no se alinea con la definición estándar de democracia: la separación de poderes. En este tipo de régimen, el poder ejecutivo puede acumular un mayor control sobre los otros poderes, lo que puede afectar la división de poderes y limitar los contrapesos.

### Dictadura:

La dictadura es un subtipo cercano al autoritarismo y se caracteriza por su falta de elecciones verdaderamente libres y por la ausencia de limitaciones al poder del gobernante. Aunque en algunas dictaduras se pueden llevar a cabo elecciones, estas suelen estar controladas o manipuladas por el gobierno. La característica distintiva de una dictadura es la concentración de poder en manos de un solo individuo o grupo, con poca o ninguna participación ciudadana en la toma de decisiones.

Además de estos ejemplos, existen otros subtipos de democracia y autoritarismo que se aplican a situaciones específicas. Algunos de estos subtipos incluyen la democracia iliberal, tutelada, hegemónica, el autoritarismo competitivo, plebiscitario o limitado. Estos subtipos no constituyen tipos ideales por sí mismos, sino que son variantes que se ajustan dentro del continuo entre democracia y autoritarismo, y a menudo se aplican a casos particulares para describir características específicas de sus sistemas políticos.

## Régimenes híbridos

Los régimenes híbridos son aquellos que se encuentran en una posición intermedia entre la democracia y el autoritarismo, combinando elementos de ambos tipos de régimen. Estos régimenes se caracterizan por tener indicadores que reflejan características tanto democráticas como autoritarias.

Por ejemplo, en un régimen híbrido podría existir la celebración de elecciones libres, pero estas podrían estar influenciadas para favorecer al partido gobernante, creando una desigualdad en la competencia política. Otra característica podría ser la garantía de la libertad de expresión, pero la restricción de la libertad de asociación. Además, podría

haber una división de poderes, pero con un Ejecutivo que tiene un poder desproporcionado en comparación con los otros poderes.

En la historia de Argentina, se pueden identificar varios gobiernos que podrían considerarse regímenes híbridos debido a diversas circunstancias y enfoques políticos. Estos incluyen los gobiernos de *Agustín Pedro Justo*, *Juan Domingo Perón*, *Arturo Frondizi*, *Arturo Umberto Illia* e *Isabel Perón*, cada uno con características específicas que combinan elementos democráticos y autoritarios.

### De un régimen político a otro

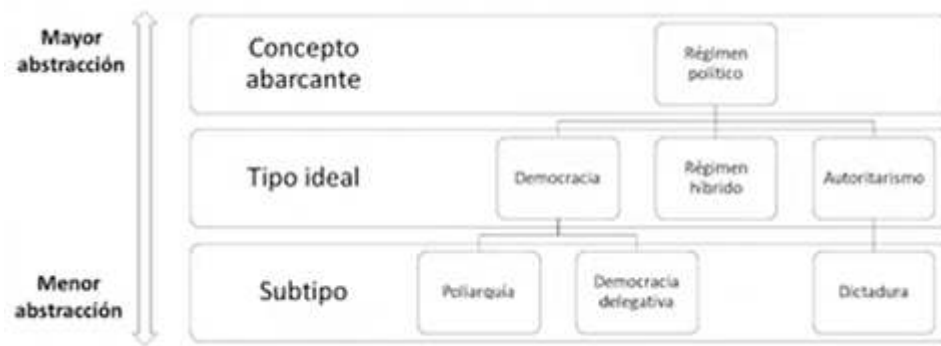
La transformación de un régimen político en otro se conoce como una transición. Durante este proceso, un régimen existente cambia sus características y valores, lo que puede llevarlo a convertirse en un tipo diferente de régimen. Las transiciones pueden ser complejas y se basan en cambios profundos en los indicadores clave que definen un régimen, como la libertad de expresión o la libertad de reunión.

La dirección en la que evoluciona un régimen depende de los cambios que ocurran en sus indicadores. Por ejemplo, si un régimen democrático comienza a limitar las libertades civiles, podría transformarse en un régimen híbrido, que combina elementos de democracia y autoritarismo. Si continúan las restricciones y se eliminan aún más libertades, el régimen podría finalmente convertirse en autoritario, caracterizado por la ausencia de libertades democráticas.

Por otro lado, si un régimen autoritario comienza a introducir reformas democratizadoras, como la celebración de elecciones libres y la protección de las libertades civiles, podría evolucionar hacia un régimen híbrido y, eventualmente, alcanzar un estado de democracia plena.

Es importante reconocer que los regímenes no son estáticos y pueden cambiar a medida que las políticas y actitudes de quienes detentan el poder se modifican. Sin embargo, también es posible que los regímenes se mantengan sin cambios, dependiendo de las decisiones de los gobernantes.

Es esencial diferenciar entre un cambio de gobierno y un cambio de régimen. Un gobierno puede cambiar dentro del mismo régimen, y un régimen puede mantenerse constante a pesar de los cambios en el gobierno. Por ejemplo, en la Argentina, ha habido diversas transiciones a lo largo de la historia, desde regímenes autoritarios hasta democráticos y viceversa. Las transiciones pueden involucrar una serie de gobiernos y políticas que cambian la naturaleza del régimen, pero también pueden haber períodos en los que un régimen se mantiene relativamente estable a pesar de los cambios en el liderazgo gubernamental.



## **Capítulo 9 “Golpes de Estado”**

- ❖ Definición de Golpes de Estado.
- ❖ Clasificación de Golpes de Estado.
- ❖ Interrupción institucionales sin cambio de régimen
- ❖ Golpes de Estado en Argentina.
- ❖ Interrupciones institucionales en Argentina.
- ❖ Golpe de estado contra Frondizi.

### **Definición de golpes de Estado**

Un golpe de Estado implica la ruptura del régimen político existente y la instalación de uno nuevo, generalmente mediante la utilización ilegal de la fuerza para derrocar un gobierno constitucional. En la mayoría de los casos, un golpe de Estado se lleva a cabo para cambiar desde un régimen democrático hacia uno no democrático. En la historia de Argentina, todos los golpes de Estado desde 1930 hasta 1976 provocaron la caída de un régimen democrático y la imposición de uno no democrático.

Un golpe de Estado siempre implica la violación de las normas y leyes establecidas en la constitución y en las regulaciones del régimen político. Las fuerzas militares que llevan a cabo un golpe de Estado interrumpen la obediencia a las autoridades políticas legítimas, lo que lo convierte en un acto inconstitucional y, por lo tanto, ilegal.

Independientemente de la justificación que se presente, un golpe de Estado siempre es un acto ilegal. Además, implica la utilización de algún nivel de violencia por parte de quienes ejecutan el golpe. El grado de violencia puede variar y está relacionado con la intensidad de la oposición social percibida y la fortaleza del gobierno que se busca derrocar.

Aunque los militares suelen liderar y planificar los golpes de Estado, estos también cuentan con el apoyo de diversos actores civiles, como sectores políticos, sociales, religiosos y gremiales, así como influencia internacional en algunos casos.

Los golpes de Estado a menudo involucran a varios grupos sociales y sectores que comparten el objetivo de poner fin al régimen democrático. En algunos casos, cuando la democracia es restaurada después de un período no democrático, los golpistas pueden volver a unirse y conspirar nuevamente debido a la vulnerabilidad del nuevo régimen. Esta



dinámica se ha visto reflejada en la historia de Argentina, donde los cambios entre regímenes democráticos y no democráticos han sido recurrentes.

## Clasificación de golpes de Estado

Los golpes de Estado pueden ser clasificados en varios tipos según quiénes lideran el golpe y las circunstancias específicas que lo rodean:

- ★ Golpes militares: Estos golpes ocurren cuando las Fuerzas Armadas toman el control del poder y constituyen el grupo dominante en la coalición golpista. En este tipo de golpe, todas las instituciones quedan bajo control militar, y los líderes de las fuerzas suprimen el parlamento y designan a líderes como el presidente, gobernadores e intendentes. En la historia argentina, los golpes militares han sido comunes, como el ocurrido en 1976. En estos golpes, las decisiones son tomadas dentro de la institución militar, y las fuerzas armadas ejercen el poder real.
- ★ Golpes de otros actores: No solo las Fuerzas Armadas pueden organizar un golpe de Estado. Otros actores también pueden impulsar un golpe para cambiar la dirección política del país, violando la legalidad constitucional vigente. Aunque menos comunes en la historia argentina, existen ejemplos de este tipo de golpes en otros países, como el caso de Honduras en 2009.
- ★ Autogolpes de Estado: En este tipo de golpes, un gobierno originalmente democrático se mantiene en el poder más allá de los límites legales. Esto puede suceder debido al temor de perder elecciones, la falta de poder para llevar a cabo su proyecto o la limitación de la reelección. En este caso, el presidente elegido democráticamente se convierte en un dictador, anulando el parlamento, la justicia y suspendiendo las garantías constitucionales. Aunque no se ha registrado este tipo de golpes en Argentina, ejemplos pueden encontrarse en otros lugares, como el de *Alberto Fujimori* en Perú en la década de 1990.

Cada golpe de Estado tiene características propias y puede ser distinguido por sus causas, líderes, desarrollo, consecuencias y efectos en el sistema político y la sociedad. A menudo, los golpes de Estado se desencadenan en medio de una profunda crisis política, institucional o económica, en la que el gobierno democrático en turno pierde legitimidad y capacidad para solucionar los problemas del país. Los golpistas se aprovechan de la percepción de la falta de soluciones y de la falta de apoyo al gobierno para justificar su acción. Además, en muchas ocasiones, los golpistas cuentan con el respaldo de sectores poderosos como el ejército, la Iglesia, la prensa y otros actores influyentes que podrían evitar el golpe.

## Interrupciones institucionales sin cambio de régimen

Interrupciones institucionales sin cambio de régimen se han vuelto más comunes en el siglo XXI, en contraste con los tradicionales golpes de Estado militares que caracterizaron gran parte del siglo XX. Estas interrupciones no cambian el régimen político, pero sí pueden llevar a cambios en la dirección política del país. Se destacan por los siguientes elementos:

- ★ Cambio de gobierno sin cambio de régimen: A diferencia de los golpes de Estado, en las interrupciones institucionales, el régimen político no cambia. En lugar de tomar el control las fuerzas armadas, otros actores como el congreso, la justicia o

sectores poderosos (económicos, sociales o políticos) pueden influir en la caída anticipada de un presidente democráticamente electo.

- ★ Movilización popular y acciones de congresos: Las interrupciones institucionales pueden ser resultado de la movilización popular, con protestas y manifestaciones que debilitan la legitimidad del gobierno. En algunos casos, el congreso puede decidir destituir a un presidente antes de completar su mandato, como sucedió en Brasil con *Fernando Collor de Mello* en 1992 y en Paraguay con *Fernando Lugo* en 2012.
- ★ Presión de sectores poderosos: Grandes grupos económicos también pueden jugar un papel importante al ejercer presión a través del mercado financiero y la economía. Mediante ataques especulativos y manipulación de variables económicas como el tipo de cambio, pueden contribuir a la desestabilización del gobierno en ejercicio.
- ★ Desorden social y pérdida de legitimidad: La combinación de problemas económicos y desorden social puede llevar a la pérdida de legitimidad del gobierno en el poder. Los ciudadanos pueden perder la confianza en la capacidad del gobierno para resolver la crisis económica y mantener el orden social, lo que facilita el cambio de gobierno.
- ★ Efecto en Argentina: En la historia argentina, este tipo de acciones han acelerado el fin de presidencias, como ocurrió en 1989 con *Raúl Alfonsín* y en 2001 con *Fernando de la Rúa*. Los factores económicos y sociales, combinados con la falta de confianza en la gestión gubernamental, contribuyeron a estos cambios de gobierno sin un cambio en el régimen político.

En resumen, las interrupciones institucionales representan una forma de inestabilidad política en la que no se produce un cambio en el régimen político, pero sí se generan cambios en la dirección política del país. Estos cambios pueden ser impulsados por la movilización popular, acciones del congreso, presiones de sectores poderosos y problemas económicos y sociales que afectan la legitimidad del gobierno en el poder.

### Golpes de Estado en Argentina

Los golpes de Estado en la historia argentina han sido eventos significativos que han tenido un impacto profundo en la dirección política y social del país. A lo largo del siglo XX, se produjeron varios golpes de Estado y otras formas de interrupción institucional que cambiaron la configuración del gobierno y en ocasiones el régimen político.

Estos golpes de Estado han tenido diversas características y motivaciones a lo largo de su historia. A continuación, se resumen los principales golpes y momentos de inestabilidad política en el país:

1. Golpe de 1930: Liderado por el general *José Félix Uriburu*, derrocó al presidente *Hipólito Yrigoyen*. Aunque no tuvo un apoyo activo de las Fuerzas Armadas, contó con el respaldo de sectores de la prensa, la Iglesia y partidos opositores. *Uriburu* fue reconocido como presidente provisional, sentando el precedente de gobiernos de facto.
2. Golpe de 1943: Derrocó al gobierno de *Ramón Castillo*. Fue un golpe militar con poca participación civil. Surgió como respuesta a la intención de *Castillo* de

cambiar la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Admiraban el modelo fascista italiano y *Juan Domingo Perón* tuvo un papel relevante. Hubo disputas internas y varios militares se autoproclamaron presidentes.

3. Golpe de 1955: Derrocó al presidente *Juan Domingo Perón*. Se caracterizó por su antiperonismo y la violencia contra los seguidores de *Perón*. Hubo falta de acuerdo en la coalición golpista, lo que resultó en conflictos internos y un presidente fugaz.
4. Interrupción Institucional de Frondizi (1958-1962): *Arturo Frondizi* fue elegido presidente, pero su vicepresidente renunció y *José María Guido* asumió. Mantuvo la fachada constitucional pero con cambios en la sucesión presidencial.
5. Interrupción Institucional contra Illia (1963-1966): El gobierno de *Arturo Illia* fue derrocado por diferencias políticas y ambiciones de actores internos. Contó con el apoyo del peronismo y *Juan Domingo Perón* desde el exilio.
6. Golpe de 1966: Liderado por el general *Juan Carlos Onganía*. Buscaba implementar cambios estructurales en la economía y la sociedad, pero enfrentó oposición y un movimiento social significativo, como el "Cordobazo".
7. Golpe de 1976: El más sangriento de la historia argentina. Se instauró el terrorismo de Estado, violando sistemáticamente los derechos humanos. Decenas de miles de personas fueron desaparecidas, asesinadas, secuestradas o exiliadas.

La historia argentina ha estado marcada por la inestabilidad política, con golpes militares y momentos de interrupción institucional. Estos eventos reflejan profundas divisiones y conflictos en la sociedad, y aunque el país ha transitado hacia la democracia desde 1983, la memoria de estos acontecimientos sigue influyendo en la cultura y la política del país.

### Interrupciones institucionales en Argentina

Las interrupciones institucionales en la historia argentina han sido eventos en los cuales los presidentes constitucionales tuvieron que abandonar sus cargos sin que eso resultara en un cambio de régimen político. A continuación, se describen los casos más relevantes:

- Interrupción Institucional de Cámpora (1973): *Héctor Cámpora* asumió la presidencia en 1973, pero renunció junto con su vicepresidente *Vicente Solano Lima* debido a presiones internas en el peronismo para permitir que *Juan Domingo Perón* regresara al país y asumiera la presidencia. *Raúl Lastiri*, presidente de la Cámara de Diputados, asumió como presidente interino hasta que *Perón* ganara las elecciones.
- Interrupción Institucional de De la Rúa (2001): *Fernando de la Rúa* renunció a la presidencia en 2001 en medio de una profunda crisis económica y social. Ante su renuncia, el Congreso utilizó el procedimiento constitucional para designar a su reemplazante. *Ramón Puerta*, presidente provisional del Senado, asumió temporalmente como presidente interino hasta que se convocaran elecciones.

En ambos casos, las interrupciones institucionales no implicaron un cambio de régimen político ni la llegada de fuerzas militares al poder, como había ocurrido en otros momentos de la historia argentina. Sin embargo, reflejaron las tensiones y crisis políticas que el país atravesó en esos momentos. Estos eventos ilustran cómo la democracia argentina ha enfrentado desafíos y crisis en su funcionamiento, pero sin perder su marco constitucional y democrático.

## Golpe de Estado contra Frondizi

El caso del intento de golpe de Estado contra el presidente *Arturo Frondizi* en 1963 es un ejemplo particular de cómo las acciones de los militares y las dinámicas políticas pueden resultar en una interrupción institucional en lugar de un cambio de régimen. En este caso, a pesar de la destitución de *Frondizi* por parte de los militares, el sistema de sucesión previsto en la Constitución Nacional se mantuvo intacto, lo que resultó en una continuidad institucional y no en un cambio radical en el régimen político.

La intervención de los militares en este caso estuvo motivada por varias razones, incluyendo su poder y su descontento con las políticas de *Frondizi*. Aunque lograron sacar a *Frondizi* del poder, su falta de consenso y la necesidad de mantener cierta apariencia de legalidad llevaron a la decisión de no asumir directamente el control del gobierno. En lugar de eso, optaron por mantener a *José María Guido*, presidente de la Cámara de Senadores, como presidente interino hasta las próximas elecciones.

La elección de no imponer un presidente militar se debió a las divisiones internas y al temor a la reacción negativa de la sociedad y la comunidad internacional. Esto resultó en una situación ambigua en la que *Frondizi* había sido destituido pero la sucesión se ajustó a las reglas constitucionales. Como resultado, se puede considerar que este evento fue una interrupción institucional, ya que no logró cambiar el régimen político ni romper con el orden constitucional.

Este caso destaca la complejidad de los procesos políticos y cómo un intento de golpe de Estado puede evolucionar en una dirección no prevista por los instigadores originales. Además, resalta cómo la Constitución y las normas establecidas pueden jugar un papel importante en la determinación de la sucesión y la continuidad institucional, incluso en situaciones de crisis y conflicto.



## **Capítulo 7 “Consideraciones sobre el populismo”**

- ❖ Tres enfoques que abordan el estudio del populismo.
- ❖ Liderazgo populista.
- ❖ Fenómenos del populismo (nivel global y en Argentina).

### Introducción

El populismo, una expresión política arraigada en la historia y el presente de América Latina, ha sido moldeado por una serie de líderes influyentes como *Juan Domingo Perón*, *Getulio Vargas*, *Carlos Menem* e *Hipólito Yrigoyen*. Sin embargo, definir el populismo se convierte en un desafío debido a la multiplicidad de enfoques y matices que rodean este concepto. A lo largo de la historia, ha sido aplicado a una diversidad de líderes y movimientos, lo que ha llevado a una conceptualización compleja y en constante evolución.

### Tres enfoques

El estudio del populismo abarca tres enfoques principales que ofrecen diferentes perspectivas sobre su naturaleza y origen:

1. El primer enfoque, arraigado en el contexto socioeconómico, asocia el populismo con países latinoamericanos marcados por la pobreza y la marginalidad. Esta visión ve al populismo como una respuesta a las crisis económicas cíclicas, donde líderes populistas se erigen como agentes de cambio capaces de reestablecer el orden social y económico. *Touraine* (1999) y *Vilas* (1988) proponen que el populismo es un modelo político que destaca la intervención estatal en asuntos sociales, reafirmando la importancia del Estado como agente de transformación. Esta perspectiva conecta el populismo con la democracia delegativa, en la cual los ciudadanos confían en el poder estatal para superar las crisis.
2. El segundo enfoque se enfoca en la crisis de representación de los partidos políticos tradicionales. *Freidenberg* (2007 y 2011) propone que el populismo se refiere a un estilo de liderazgo que se caracteriza por la relación directa entre el líder y sus seguidores, a menudo personalistas y carismáticos. En esta visión, los líderes populistas evitan intermediaciones institucionales y buscan una conexión directa con sus seguidores. Esta perspectiva plantea que el populismo surge como una alternativa personalista de representación colectiva, surgiendo como un contrapeso a la crisis de confianza entre la sociedad y los partidos políticos convencionales.
3. El tercer enfoque se centra en la dimensión discursiva del populismo. *Laclau* (1986) y *De Ipola* (1983) conceptualizan el populismo como un discurso político que une demandas insatisfechas de la sociedad al crear una cadena de equivalencias. Este discurso divide el espectro político en dos, promoviendo la descalificación constante de los "otros" que no se alinean con la cadena equivalencial. Los líderes populistas, en esta perspectiva, son "significantes vacíos" que condensan las demandas de la cadena equivalencial. Esta visión destaca el papel crucial del discurso en la construcción del populismo y cómo los líderes logran atraer seguidores mediante la promesa de representación directa.

Estos tres enfoques, aunque distintos, se superponen y enriquecen la comprensión del populismo como fenómeno político. Cada enfoque aporta una perspectiva única sobre cómo el populismo se relaciona con la democracia, la economía y la forma en que los líderes interactúan con sus seguidores.

### Liderazgo populista

El liderazgo populista se caracteriza por una serie de elementos que definen la relación entre el líder y sus seguidores, según la perspectiva de *Freidenberg* (2011):

- ★ Alternativa al poder tradicional: El líder populista se presenta como una opción concreta que busca cambiar el sistema político existente. Esto implica confrontar y acusar a actores políticos tradicionales de ser responsables del estancamiento del país, utilizando la "herencia recibida" como excusa para implementar planes de gobierno sin muchos mecanismos de control.
- ★ Relación directa con los seguidores: La relación entre el líder y sus seguidores es directa y personal, sin intermediarios institucionales ni personales. Esto lleva a una escasa intervención ciudadana en la toma de decisiones, salvo en el ámbito

discursivo. Los líderes populistas se presentan como salvadores extraordinarios que deben ser esperados durante un período constitucionalmente establecido.

- ★ Polarización de la sociedad: Los líderes populistas polarizan la sociedad a través de un discurso excluyente que divide a la población en términos de estar "a favor" o "en contra". El discurso es radical y no admite términos medios, asociando sus posiciones con el pueblo y la nación, excluyendo a quienes no compartan sus opiniones.
- ★ Tejer coaliciones entre sectores dispares: A pesar de su discurso excluyente, los líderes populistas construyen coaliciones políticas que representan diversos sectores sociales. Estas coaliciones encuentran en el Estado un espacio donde pueden defender sus intereses, y el líder utiliza la legitimidad mayoritaria para justificar sus acciones y proyectos de cambio.
- ★ Forma carismática, personalista y paternalista de ejercer el poder: El líder populista ejerce el poder de manera carismática y personalista, basándose en cualidades extraordinarias que lo legitiman. Sus seguidores confían ciegamente en estas características únicas y lo consideran una persona extraordinaria en la que deben confiar plenamente.

En resumen, el liderazgo populista se caracteriza por presentarse como una alternativa al poder tradicional, mantener una relación directa con los seguidores, polarizar la sociedad a través de un discurso excluyente, formar coaliciones de sectores diversos y ejercer el poder de manera carismática y paternalista basada en cualidades únicas. Estos elementos definen la dinámica entre el líder populista y sus seguidores.

### Populismo global

El populismo, un fenómeno político con una rica historia en América Latina, ha experimentado una transformación significativa en el siglo XXI, extendiéndose más allá de la región y manifestándose en diversos rincones del mundo. En su esencia, el populismo contemporáneo se caracteriza por líderes carismáticos y discursos polarizadores que buscan establecer una conexión directa y emocional con sus seguidores. Aunque tradicionalmente asociado con la izquierda en América Latina y con la derecha en Europa, el populismo ha demostrado su capacidad de trascender las divisiones ideológicas.

Este nuevo rostro del populismo ha sido impulsado en parte por líderes como *Donald Trump* en Estados Unidos, quien irrumpió en la política con un mensaje nacionalista y anti-establishment que polarizó a la sociedad entre "nosotros" y "ellos". En Europa, partidos tanto de derecha como de izquierda han adoptado estrategias discursivas populistas, enfocándose en enemigos comunes como la inmigración, las élites financieras y las instituciones supranacionales. Ejemplos como el *Brexit* en el Reino Unido y el ascenso de líderes como *Narendra Modi* en India también ilustran cómo el populismo ha encontrado eco en diferentes continentes y contextos culturales.

Un rasgo central de este nuevo populismo es su tendencia a despreciar las instituciones democráticas, acusándolas de obstaculizar el progreso y el bienestar de la nación. Los líderes populistas argumentan que su visión única y poder absoluto son esenciales para superar los desafíos actuales y garantizar la grandeza nacional. Para lograrlo, recurren a la fragmentación de la sociedad al señalar a chivos expiatorios y alentar un fuerte sentimiento

de "nosotros contra ellos". Esta polarización y desconfianza en las instituciones establecidas se convierten en pilares fundamentales de su estrategia política.

En resumen, el populismo contemporáneo ha evolucionado más allá de sus raíces latinoamericanas y se ha convertido en un fenómeno global que trasciende las fronteras ideológicas. Liderazgos carismáticos, discursos polarizadores y la búsqueda de un poder absoluto caracterizan este nuevo populismo, que desafía las normas tradicionales de la política y redefine la relación entre los líderes y sus seguidores en un mundo cada vez más complejo y cambiante.

## Populismo en Argentina

Dos de los casos más paradigmáticos del populismo en Argentina son los movimientos liderados por *Hipólito Yrigoyen* y *Juan Domingo Perón*. Tanto el yrigoyenismo como el peronismo surgieron como respuesta a demandas democráticas y sociales insatisfechas, representando a sectores excluidos de la política tradicional. Ambos movimientos se basaron en liderazgos fuertes que construyeron discursos basados en antinomias, creando una polarización entre el "pueblo" y los adversarios.

El yrigoyenismo, liderado por *Hipólito Yrigoyen*, transformó la Unión Cívica Radical en un movimiento que se identificaba fuertemente con su líder. *Yrigoyen* se convirtió en una figura carismática y su presencia eclipsó la organización política en sí. Su discurso enfrentaba al "régimen" considerado corrupto y opresor, presentando a la Unión Cívica Radical como la encarnación de la nación en lucha por la liberación. Sin embargo, la presidencia de *Yrigoyen* fue interrumpida por una dictadura conservadora, y su movimiento regresó a sus orígenes tras su fallecimiento.

Por otro lado, el peronismo liderado por *Juan Domingo Perón* adoptó un enfoque similar, pero con características distintivas. *Perón* asumió un papel de líder indiscutido y consolidó el Partido Peronista desde el Estado. Su discurso enfrentaba a la "oligarquía" y buscaba equiparar su movimiento con la nación misma. *Perón* logró consolidar su poder y gobernó a través de una relación personal y directa con sus seguidores, identificándose con los intereses del pueblo.

Ambos líderes construyeron liderazgos carismáticos y polarizaron a la sociedad a través de discursos antagonistas. Sin embargo, existen diferencias clave entre los dos movimientos. *Yrigoyen* lideró la Unión Cívica Radical preexistente, mientras que *Perón* construyó el Partido Peronista desde el Estado. Además, *Yrigoyen* no buscó perpetuarse en el poder y promovió la sucesión, mientras que *Perón* reformó las leyes para prolongar su mandato y designó a su esposa como su sucesora.

En resumen, el yrigoyenismo y el peronismo representan dos casos paradigmáticos del populismo en Argentina. Aunque comparten elementos como liderazgos carismáticos y discursos polarizadores, también presentan diferencias significativas en términos de construcción de partidos, sucesión y búsqueda de poder absoluto. Estos movimientos ejemplifican cómo el populismo puede tomar diferentes formas en función de sus contextos y líderes.



## Capítulo 5 “Los sistemas políticos contemporáneos”

- ❖ Poliarquía.
- ❖ Características de la poliarquía.
- ❖ El marco institucional de la poliarquía.

### Poliarquía

La democracia es un concepto amplio y complejo que se ha utilizado de diversas maneras tanto en la academia como en la opinión pública y los medios de comunicación. A medida que se han desarrollado diferentes enfoques y perspectivas analíticas, se han generado múltiples definiciones y tipos de democracia, como la democracia directa, deliberativa, social y participativa, entre otras. Todas estas variedades comparten la idea fundamental de que las elecciones y la participación de la sociedad en el gobierno son componentes esenciales de la democracia.

Sin embargo, esta diversidad de enfoques y definiciones ha generado confusión y controversia en torno al concepto de democracia. En este contexto, el politólogo *Robert Dahl* propuso el concepto de "poliarquía" como una forma de ordenar y simplificar la noción de democracia. *Dahl* argumentó que lo que realmente define a un régimen como democrático es la celebración de elecciones competitivas para determinar quiénes ocupan el poder.

La poliarquía se convirtió en un punto de referencia en los estudios sobre democracia y representación, describiendo las democracias occidentales contemporáneas como sistemas políticos en los que se celebran elecciones competitivas. Sin embargo, *Dahl* también reconoció que estas democracias eran imperfectas y distaban de alcanzar el ideal democrático.

En última instancia, *Dahl* planteó que la democracia es una idea utópica e ideal a la que la sociedad no puede aspirar completamente, ya que su realización plena parece inalcanzable en la práctica. Este reconocimiento de la imperfección de la democracia es importante para comprender el concepto de poliarquía y cómo se aplica en las sociedades democráticas reales.

### Características de la poliarquía

El concepto de "poliarquía" se refiere a la democracia tal como existe en la realidad. Fue desarrollado por *Robert Dahl* y *Charles Lindblom* en su libro "Politics, Economy and Welfare" en 1953 para describir las características que definen y distinguen a los sistemas políticos democráticos reales.

Características de la poliarquía:

1. Derecho a votar y a ser votado: Las elecciones determinan quiénes ocupan el gobierno, y todos los ciudadanos tienen el derecho de votar y presentarse como candidatos para cargos públicos. Esto garantiza la igualdad de oportunidades en la participación política.



2. Las elecciones deben ser limpias y todos los votos deben valer lo mismo: El sufragio en una poliarquía es universal y todos los votos tienen el mismo valor. No debe haber discriminación en función de la raza, género, religión u otras características personales. Las elecciones en una poliarquía deben ser libres de manipulación y fraude, y todas las partes deben tener igualdad de oportunidades en la competencia electoral. Esto asegura la legitimidad del proceso democrático.
3. Los funcionarios públicos electos no pueden ser condicionados por personas sin representación popular electoral: Debe existir una subordinación de los funcionarios públicos no elegidos a aquellos elegidos popularmente. Esto no quiere decir que los funcionarios políticos no deban rendir cuentas y ser controlados por otras instituciones como la justicia o los parlamentos. Por el contrario, significa que no debe haber una persona o grupo que posea el poder (o pueda condicionarlo) sin haber sido electo de manera democrática, es decir, a través de elecciones.
4. Debe existir una alternativa frente al gobierno y cada ciudadano puede elegir a qué grupo acercarse: En una poliarquía, debe haber alternativas políticas disponibles para los ciudadanos, lo que significa que no debe haber un monopolio de poder por parte de un solo partido o grupo. Los ciudadanos deben poder elegir entre diferentes opciones políticas.
5. La existencia de libertad de expresión y variedad de información: Deben existir múltiples fuentes de información y libertad de expresión para garantizar que los ciudadanos estén bien informados y puedan tomar decisiones informadas.
6. Debe haber partidos diferentes con iguales posibilidades de llegar al poder y que, a su vez, representen programas e ideas distintas: Además de la diversidad de partidos políticos, también debe haber diversidad en términos de políticas y programas que se ofrecen a los ciudadanos. Esto asegura que las políticas se ajusten a una variedad de intereses y demandas.

### Marco institucional de la poliarquía

El marco institucional de la poliarquía es esencial para garantizar que las condiciones que definen una democracia real funcionen correctamente. Este marco se basa en dos principios fundamentales: inclusión y contestación.

1. Principio de Inclusión: Este principio se refiere a la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos más allá de las elecciones. Incluye la posibilidad de que los ciudadanos se organicen en asociaciones voluntarias, presenten peticiones al Estado y a los líderes políticos, realicen manifestaciones y protestas, y participen en diversas formas de expresión política. La inclusión significa que los ciudadanos tienen la oportunidad de influir en las decisiones gubernamentales y no se limita solo a votar en elecciones.
2. Principio de Contestación: Este principio se relaciona con la competencia política. En una poliarquía, se debe permitir la existencia de elecciones competitivas en las que varios partidos y candidatos compitan por el poder. No debe haber un monopolio del poder ni restricciones indebidas que impidan la participación de nuevos partidos o candidatos. La contestación implica que el poder no se ejerce de

manera monopólica y que hay oportunidad para la alternancia de partidos y líderes en el gobierno.

Los partidos políticos desempeñan un papel crucial en este marco institucional de la poliarquía. Actúan como intermediarios entre los ciudadanos y el gobierno, permitiendo la participación política de la población. Además, compiten en elecciones para colocar a sus candidatos en cargos públicos, lo que garantiza el principio de contestación.



## **Capítulo 8 “Dictadura. Construyendo un concepto complejo”**

- ❖ Dictaduras, cómo inician y cómo se sostienen.
- ❖ Tipos de régimen autoritario

### **Qué son las dictaduras, cómo inicia y cómo se sostienen**

Aunque existen diversas definiciones de dictadura, coinciden en que es un subtipo de régimen autoritario donde una o varias personas asumen el control total del Estado sin restricciones. Esto implica la concentración completa del poder, a diferencia de la división de poderes propia de la democracia.

En una dictadura, los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo no operan de manera independiente, y la división de poderes propia de la democracia desaparece. El Poder Legislativo es anulado, a menudo mediante la disolución de los parlamentos o la prohibición de elecciones. El Poder Judicial no puede actuar de manera independiente, ya que los jueces son designados y removidos según la voluntad del dictador y su grupo, lo que garantiza arbitrariedad e impunidad. En cuanto a la función del Poder Ejecutivo, en una dictadura se reduce a la figura del dictador, y en su grupo más cercano.

Además, en una dictadura se restringen o suprimen las libertades de expresión, reunión y asociación, así como los derechos constitucionales que los ciudadanos suelen tener en un régimen democrático. Las normas democráticas son reemplazadas por aquellas establecidas por el grupo en el poder, que pueden variar según la voluntad del dictador y su grupo.

Otra característica fundamental es que en una dictadura no existen restricciones en cuanto a la duración del régimen, a diferencia de los regímenes democráticos donde hay normas que establecen tiempos de duración y posibilidades de acceder nuevamente al poder. En las dictaduras, los tiempos y condiciones de acceso y permanencia en los cargos de poder son manejados arbitrariamente por quienes detentan el poder. El final de un gobierno puede ocurrir por una diversa gama de razones, por ejemplo; porque los dictadores deciden dejar el poder, porque no pueden continuar controlándolo, han pedido legitimidad o porque consideran que han cumplido su tarea. Muchas veces la misma sociedad exige su retirada porque no han cumplido lo prometido o está harta del autoritarismo.

La instauración de una dictadura implica la ruptura de un orden político anterior. A veces, las dictaduras surgen incluso entre gobiernos democráticamente elegidos cuando estos deciden realizar un autogolpe de Estado y eliminar las garantías institucionales. Por

ejemplo, ante la posibilidad de perder el poder por la vía electoral, utilizan los resortes del Estado para no obedecer las leyes y perpetuarse al mando del gobierno.

En resumen, una dictadura se diferencia de un régimen democrático porque concentra el poder en pocas manos sin división de poderes, restringe o suprime libertades y derechos civiles y políticos, y maneja de manera arbitraria las condiciones de acceso y permanencia en el poder. Para lograr legitimidad, las dictaduras suelen apelar a un supuesto interés público y prometer representar el bien común, aunque este proceso conlleva un alto costo para la sociedad.

### Tipos de régimen autoritario

El régimen autoritario es un tipo ideal que puede incluir varios subtipos abarcando desde un autoritarismo superficial al totalitarismo más inhumano. En este último el gobernante tratará de utilizar todo su poder para imponer una ideología determinada o para convertirse él mismo en un Dios sobre la tierra, con poder de vida y muerte sobre la población. Ejemplo; fascismo y nazismo.

Los regímenes totalitarios extienden su control a todos los aspectos de la vida de la población e influyen en las formas de accionar político, la educación, el esparcimiento, inclusive en cuestiones de la vida privada e íntima como las formas que deben adoptar las familias, la cantidad de hijos, entre otros.

La libertad de la sociedad civil se reduce drásticamente, y la población es movilizada constantemente en eventos colectivos para demostrar adhesión al dictador, legitimando su figura. De esta forma, se organizan tanto movilizaciones militares, civiles, desfiles, torneos que tienen como último objetivo legitimar la figura del dictador.

Las dictaduras pueden tener diferentes objetivos y orígenes, surgiendo en respuesta a la coyuntura social. Algunas buscan imponer una religión o mantener el poder para enriquecerse, mientras que otras surgen en medio de conflictos internos o para favorecer a ciertos sectores económicos, étnicos o sociales. Incluso pueden basarse en líderes con rasgos cercanos a la locura.

Existen otros usos del término "dictadura". Un uso extendido en la ciencia política desde los orígenes marxista es el de la "dictadura del proletariado", que se refiere al gobierno de los trabajadores tras el triunfo del sistema socialista. Según esta perspectiva, esta dictadura es justificada por cuestiones de justicia social y la igualdad absoluta de las personas.

En el contexto de América Latina en el siglo XX, las dictaduras fueron principalmente ejercidas por gobiernos militares que justificaron su toma de poder debido a la ineficiencia de los gobiernos democráticos para resolver crisis económicas y luchar contra la "subversión". Utilizando el pretexto de "salvar" a la nación de grupos izquierdistas armados, llevaron a cabo golpes de Estado y cometieron atrocidades, aplicando terrorismo de Estado y tratando de ocultar estos hechos a nivel nacional e internacional.



## Capítulo 11 “El terrorismo de Estado”

- ❖ Concepto de terrorismo.
- ❖ Terrorismo de Estado.
- ❖ Terrorismo de Estado en Argentina.

### Introducción al concepto de terrorismo

“Terrorismo” es un concepto que hace referencia al uso de la violencia para presionar a un gobierno o instituciones de la sociedad a tomar ciertas decisiones o conceder demandas políticas, religiosas o sociales a favor del grupo que lleva a cabo la acción terrorista. Estos actos tienen connotaciones políticas y un fuerte impacto emocional en la población, especialmente si causan víctimas o destrucción.

Se define un "acto terrorista" como una actividad violenta realizada por una organización no estatal motivada por aspectos políticos, religiosos o ideológicos. A lo largo del siglo XX y el siglo XXI, la naturaleza de la violencia terrorista ha evolucionado. En el pasado, estuvo ligada a reivindicaciones nacionales o ideológicas y era ejecutada principalmente por grupos reducidos que llevaban a cabo acciones violentas como secuestros, bombas y asesinatos en espacios públicos.

En el siglo XXI, se han sumado grupos religiosos radicalizados, especialmente el fundamentalismo islámico representado por organizaciones como Al Qaeda y ISIS. Estos grupos, a menudo más pequeños, utilizan eficientemente herramientas tecnológicas y se valen de las redes sociales. Además, sus acciones no se limitan a un país en particular y pueden adaptarse según la coyuntura y las oportunidades de organización. Ejemplos de sus acciones incluyen los ataques a las Torres Gemelas en Estados Unidos en 2001 y los asesinatos en la revista francesa Charlie Hebdo en 2015.

El terrorismo busca lograr objetivos que el grupo considera inalcanzables por otros medios, utilizando el miedo o la amenaza de su uso. El concepto de "terrorismo" ha evolucionado con el tiempo, inicialmente asociado con un período particular de la Revolución Francesa conocido como "el terror", que hacía referencia a acciones cometidas por el Estado. Sin embargo, con el tiempo, el término comenzó a referirse a la violencia perpetrada por actores no estatales, lo que llevó a definir otra categoría, el "terrorismo de Estado", para describir la violencia ilegal aplicada por el Estado.

### Terrorismo de Estado

El terrorismo de Estado representa un tipo particular de terrorismo en el cual el perpetrador de la violencia terrorista es el propio Estado. Esta situación plantea una convivencia entre un Estado formal y otro "clandestino", ya que la coerción en este caso no es un recurso legal o legítimo para superar una situación circunstancial, sino que se convierte en un modus operandi. El Estado, en este contexto, se transforma en un "Estado terrorista".

Las acciones terroristas llevadas a cabo por el Estado no son resultado de un error o un acto de locura momentánea de un agente público, sino que son planificadas sistemáticamente para alcanzar objetivos vinculados al poder. Al violar las leyes que

debería cumplir e implementar, el Estado contradice su propia existencia y desvirtúa su papel fundamental de proteger y velar por la seguridad de la sociedad.

Tradicionalmente, la sociedad reconoce al Estado como el poseedor del uso monopolístico de la violencia legítima, un atributo que define su condición estatal. Sin embargo, cuando el Estado utiliza la violencia de manera abusiva y al margen de las leyes, va en contra de las condiciones fundamentales de su existencia como organización social. Esto se traduce en un ejercicio abusivo del poder otorgado por la sociedad y una violación del contrato social entre el Estado y la población.

El terrorismo de Estado a menudo surge como respuesta a grupos terroristas que amenazan el predominio o la existencia misma del Estado. En estos casos, quienes emplean violencia ilegal argumentan que no se trata de una guerra convencional y, por lo tanto, no están sujetos a las normas de los tratados internacionales. Sin embargo, al utilizar métodos y estrategias similares a los grupos que combaten, el Estado perpetúa la violencia y la crueldad en nombre de la anticipación de amenazas y la protección de la sociedad.

El terrorismo de Estado representa una de las formas más graves de violencia política, ya que no solo se ejerce sobre personas indefensas, sino que también viola el contrato original entre la sociedad y el Estado. El Estado no debe transgredir la ley y utilizar la fuerza que la sociedad le otorga en su contra, lo que subraya la importancia fundamental de la legalidad en la relación entre la sociedad y el Estado.

### El terrorismo de Estado en Argentina

En el contexto argentino del siglo XX, hubo múltiples grupos que llevaron a cabo actos terroristas, desde los anarquistas en los primeros años hasta las guerrillas en la década de 1970. Sin embargo, esta sección se enfoca en los actos violentos e ilegales cometidos por las instituciones estatales.

Durante las décadas de 1960 y 1970, América Latina fue testigo de numerosos casos de terrorismo de Estado, acentuados por la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, enseñada en la Escuela de las Américas, donde se entrenaron muchos militares latinoamericanos que luego implementaron la violencia del terrorismo de Estado en sus respectivos países. La excusa para esta violencia ilegal era la erradicación de la amenaza comunista representada por la existencia de la Unión Soviética.

En Argentina, la violencia ya estaba presente en los años 70 con el surgimiento de proyectos autodenominados "revolucionarios" que empleaban la lucha armada como estrategia política, como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), entre otros. La violencia estatal comenzó ilegalmente con el asesinato de dieciséis presos políticos en una base militar de la Marina de Guerra en Trelew en 1972.

Posteriormente, la violencia paraestatal se estructuró en el contexto del enfrentamiento armado entre la izquierda y la derecha peronista, con esta última protegida por sectores de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Esto condujo a la combinación de la acción estatal con la de los grupos paramilitares en la conocida "Triple A" (Alianza Anticomunista Argentina), que produjo cientos de muertes. Antes del golpe de Estado del 24 de marzo de

1976, el gobierno de Isabel Perón encomendó a las Fuerzas Armadas "aniquilar" a la guerrilla a partir del Operativo Independencia en Tucumán a principios de 1975.

El éxito logrado por las Fuerzas Armadas les permitió aplicar a escala nacional el modelo de Estado "contrainsurgente" basado en el terrorismo de Estado. A partir de 1976, la violencia ilegal alcanzó límites nunca vistos en la historia del país, incluyendo la desaparición forzada de personas y la apropiación y cambio de identidad de niños secuestrados o nacidos en cautiverio.

Es importante resaltar la participación de sectores civiles en estos procesos. El terrorismo de Estado no fue solo responsabilidad de las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad del Estado; hubo grupos minoritarios que se beneficiaron directamente con la imposición a la sociedad de un determinado modelo político y económico.

En este contexto, los militares contaron con un amplio respaldo de sectores importantes del empresariado, gran parte de la cúpula eclesiástica y un sector del abanico político. El discurso de las Fuerzas Armadas aseguraba que era una guerra que trascendía el plano de la política, ya que el triunfo de las organizaciones armadas, por su ideología comunista, atentaría contra el orden aceptado de la "civilización occidental y cristiana".

A pesar de este apoyo a la dictadura, no toda la población estuvo de acuerdo. Las Fuerzas Armadas asumieron el disciplinamiento de la sociedad a través de la adopción del régimen de desaparición de personas. Las consecuencias del terrorismo de Estado generaron una fuerte corriente opositora en la opinión pública y diversos sectores de la sociedad. Organizaciones de derechos humanos jugaron un papel crucial en la lucha por la verdad y la justicia durante la transición a la democracia en 1983.



## ***Capítulo 12 “Genocidio, un concepto polémico y necesario”***

- ❖ Concepto de genocidio.
- ❖ El genocidio en la historia.
- ❖ El genocidio en el siglo XX.
- ❖ El genocidio en Argentina.
- ❖ Conclusiones.

### **Concepto de genocidio**

El término "genocidio" tiene su origen en la propuesta de Raphael Lemkin, un ciudadano polaco de religión judía que en 1944 postuló este término para caracterizar las matanzas por motivos raciales, de nacionalidad o religiosos. Lemkin buscaba describir actos que tuvieran como objetivo la destrucción total o parcial de un grupo humano basado en factores como raza, nacionalidad, religión u orientación étnica.

Existen interpretaciones restrictivas del término que sostienen que solo debe aplicarse a casos en los que el odio racial o nacional sea un componente clave de una práctica sistemática de exterminio de poblaciones. Ejemplos históricos citados en este contexto son el genocidio de los armenios por parte de los turcos durante la Primera Guerra Mundial y el Holocausto del pueblo judío por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió la necesidad de establecer cómo juzgar a los líderes nazis por sus prácticas de exterminio masivo. En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la Resolución 96 sobre el crimen de genocidio, que sentó las bases para la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, aprobada posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta convención establece una definición jurídica y política del genocidio, que comprende actos como la matanza de miembros del grupo, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones que acarreen su destrucción física, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y el traslado forzado de niños del grupo a otro.

A pesar de esta definición jurídica, en el uso cotidiano y en las ciencias sociales, el término "genocidio" se utiliza para referirse a prácticas que buscan, de forma intencionada, la destrucción total o parcial de un grupo humano basado en razones raciales, nacionales, ideológicas, políticas o sociales.

### El genocidio en la historia

El genocidio, entendido como la destrucción total o parcial de grupos humanos basada en razones raciales, nacionales, religiosas o sociales, puede rastrearse en la historia de la humanidad mucho antes del siglo XX. Aunque el término y su reconocimiento formal surgieron en el contexto del siglo XX, hay evidencia de prácticas que cumplen con esta definición en períodos anteriores.

Por ejemplo, en la antigüedad, tanto persas como romanos llevaron a cabo prácticas de genocidio contra pueblos conquistados que se oponían a sus conquistadores. Las cruzadas protagonizadas por los reinos cristianos europeos contra diversos grupos en el Medio Oriente también pueden considerarse actos de genocidio.

Asimismo, muchas de las invasiones de origen mongol y las guerras de religión desatadas en Europa tras la reforma protestante en el siglo XVI implicaron enfrentamientos en los que diversos grupos buscaban aniquilar o destruir al oponente.

En el contexto de América, la llegada de europeos resultó en una enorme mortandad de población nativa americana debido a la colonización, conquista, esclavitud y la propagación de enfermedades previamente desconocidas en suelo americano. La expansión de fronteras internas en los nuevos países americanos durante el siglo XIX también involucró la ocupación de territorios con exterminio de la población nativa.

En otras partes del mundo, como Asia, Oceanía y África, la expansión europea y las prácticas asociadas al imperialismo también llevaron a situaciones que pueden calificarse como genocidio. Ejemplos incluyen la "conquista" de la India, la "colonización" de Australia y la apertura forzosa de China y Japón al comercio occidental.

En resumen, si bien el término "genocidio" y su reconocimiento formal se originaron en el siglo XX, las prácticas que encajan en esta definición han existido a lo largo de la historia y se han manifestado en diferentes regiones y contextos.

## El genocidio en el siglo XX

En el siglo XX, además del genocidio armenio que marcó el inicio del siglo, se ha debatido extensamente sobre si el término "genocidio" puede aplicarse a otros eventos trágicos. Entre ellos, se han planteado debates sobre la Guerra Civil española y las atrocidades cometidas durante y después de esta por la dictadura franquista. Asimismo, se ha cuestionado si las dictaduras militares en América Latina entre las décadas de 1960 y 1980 pueden considerarse genocidios.

En países como Guatemala y Argentina, se llevaron a cabo procesos judiciales contra los responsables de las matanzas durante las dictaduras militares, pero en otros países como Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay, las leyes de amnistía y las condiciones políticas y sociales impidieron que se llevaran a cabo procesos judiciales contra los responsables.

Algunos expertos han planteado que la idea de definir ciertas poblaciones como extingibles para beneficiar a otros, ya sea por esclavizarlas o apropiarse de sus recursos o territorios, puede incluirse en el concepto de genocidio. Esto abarcaría a campesinos y poblaciones nativas en diversas regiones del mundo, tanto en el pasado como en la actualidad. Ejemplos incluyen conflictos actuales por la apropiación de tierras y recursos en América del Sur y luchas en África subsahariana.

En el siglo XX, basándose en la definición de genocidio establecida por la ONU, hay un amplio consenso sobre muchos casos en los que este término es aplicable. Ejemplos notables incluyen la masacre de tutsis por hutus en Ruanda y Burundi en 1994-1995, así como las "limpiezas étnicas" durante las guerras de desintegración de la ex-Yugoslavia en la década de 1990.

El caso más impactante que puso en foco la cuestión del genocidio fue la Shoá u Holocausto del pueblo judío perpetrado por los nazis y sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial. Se estima que seis millones de personas, la mayoría de origen judío, fueron exterminadas. El Holocausto se caracterizó por el uso sistemático del método científico y el cálculo racional para el exterminio, conocido como "solución final". Aunque algunos consideran que este es el único caso propiamente genocidio debido a su carácter intencional, planificado y basado en el odio racial, la realidad es que hay numerosos casos de genocidio a lo largo del siglo XX.

## El genocidio en Argentina

En Argentina, se pueden identificar diversos casos históricos en los que se puede aplicar el concepto de genocidio. Uno de los casos más antiguos es el del pueblo Quilmes en los Valles Calchaquies, que resistió la conquista española y participó en una rebelión a fines del siglo XVI. Tras ser derrotados, muchos fueron asesinados y los sobrevivientes fueron obligados a trasladarse a la reducción de los Quilmes, que luego dio origen al nombre de una población suburbana en la actualidad.



Sin embargo, el genocidio más sistemático y ampliamente reconocido en la historia argentina es el perpetrado por el Estado argentino durante la "Conquista del Desierto" en la Patagonia y el Chaco. Durante este período, el Estado argentino llevó a cabo una campaña de violencia y despojo contra las poblaciones nativas, reduciendo a los sobrevivientes a la servidumbre o confinándolos en reservaciones en territorios inhóspitos, siguiendo un modelo similar al de los Estados Unidos.

En el siglo XX, otro caso notable de genocidio fue perpetrado por la dictadura militar autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional" que tuvo lugar entre 1976 y 1983. Durante esta dictadura, se llevó a cabo un terrorismo de Estado en el que se buscaba eliminar a quienes se oponían a las ideas del régimen, especialmente la clase trabajadora y los jóvenes.

Existe cierta discusión sobre si el término "genocidio" debería aplicarse solo a casos que involucren un gran número de víctimas. Algunos sostienen que debería referirse a poblaciones más numerosas que las víctimas directas e indirectas de la dictadura militar. Sin embargo, esta discusión plantea la pregunta sobre si la cantidad de víctimas debería ser un criterio para determinar qué prácticas deben considerarse genocidio, lo cual puede resultar arbitrario.

### Conclusiones

En resumen, el genocidio es un término crucial para describir situaciones en las que se amenaza la existencia vital de grupos sociales que comparten características comunes, ya sean étnicas, religiosas, de nacionalidad, políticas o ideológicas. Estas amenazas pueden manifestarse de diversas formas, desde la aniquilación física hasta la neutralización y desaparición del grupo como entidad relevante en la sociedad. Este proceso implica no sólo la eliminación física, sino también la eliminación simbólica y subjetiva del grupo, siendo percibido por otros como una amenaza, no deseado o enemigo.

Estos actos pueden ocurrir tanto en tiempos de guerra como en períodos de aparente "paz", lo que resalta que el conflicto puede no estar visible de manera evidente. Por lo tanto, además de la definición jurídica de genocidio y crímenes de lesa humanidad, es fundamental crear conciencia y memoria colectiva sobre estos fenómenos. Esto permite repudiar de manera generalizada estas prácticas y evitar que se presenten como operaciones "neutras" o la eliminación de supuestos enemigos. Es esencial mostrar a las víctimas como lo que realmente son: víctimas, y cuestionar y deslegitimar a los verdaderos perpetradores, los genocidas.



## ***Capítulo 10 “Las dos transiciones a la democracia en Arg.”***

- ❖ Definición de transición.
- ❖ Actores políticos en la transición a la democracia.
- ❖ Élite políticas, incertidumbre y pactos.
- ❖ La transición fallida de 1973.
- ❖ La transición definitiva de 1983.

## Definición de transición

La transición política se define como el período entre un régimen político y otro. Comienza con la disolución del régimen no democrático y finaliza cuando se establece una forma de democracia estable sin riesgo de reversión autoritaria. En esta etapa, los partidos compiten por el control de instituciones políticas que se perciben como perdurables, marcando la consolidación cuando no hay peligro de regresión autoritaria.

Un ejemplo de esta transición es el período que siguió a la derrota en la guerra de Malvinas en 1982, que obligó al régimen militar a convocar elecciones democráticas. La transición abarcó dos gobiernos democráticos, Alfonsín y parte del mandato de Menem. Se considera que la transición finalizó cuando el gobierno de Menem derrotó a los militares "carapintadas" en diciembre de 1990, estableciendo la estabilidad democrática.

El estudio de las transiciones a la democracia se inició en la década de 1980, impulsado por expertos en ciencias sociales con el objetivo de analizar estos procesos y mejorar la calidad de las democracias emergentes. Estos especialistas se comprometieron activamente con la promoción de la democracia. La democracia, en su enfoque, se define como un sistema de reglas que permite la libre expresión de los ciudadanos y la elección de sus gobernantes a través de procesos electorales competitivos y limpios. Se busca construir un orden democrático armonioso y superar la violencia y la dictadura. La democracia se entiende como una poliarquía que incluye elementos mínimos esenciales y busca consenso.

## Actores políticos en la transición a la democracia

Durante la etapa de transición, varios actores políticos interactúan y compiten. En primer lugar, la élite política, compuesta por dirigentes que fueron expulsados del poder por los militares durante un golpe de Estado. Estos líderes comienzan a conspirar contra el régimen autoritario cuando éste pierde legitimidad debido a crisis económicas o represión gubernamental.

Para que la transición hacia un régimen democrático sea exitosa, es crucial que el gobierno autoritario esté debilitado. La élite política se reúne y llega a acuerdos generales para expulsar al gobierno no democrático, incluso cuando este aún está en el poder. Estos acuerdos se centran en la convocatoria a elecciones libres para que los partidos políticos puedan participar.

En segundo lugar, la sociedad civil, quien también desempeña un papel importante durante la transición. A través de movilizaciones y solicitudes de apoyo internacional, la sociedad civil ejerce presión a favor de la democracia. Este impulso suele aumentar a medida que la dictadura se debilita y disminuye la represión. La sociedad movilizadora puede influir en la agenda pública, imponiendo temas y obligando a los partidos políticos a abordarlos.

En tercer lugar, los "sectores blandos" del régimen autoritario, que inicialmente apoyaron a la dictadura, comienzan a inclinarse hacia una salida democrática a medida que la dictadura se acerca a su fin. En algunos casos, estos sectores buscan mantener su

influencia, mientras que en otros intentan negociar para evitar futuras investigaciones judiciales.

En cuarto lugar, existen los "nostálgicos" del régimen autoritario, que desean mantener el régimen anterior y pueden conspirar contra la consolidación de la democracia, incluso después de las elecciones. Estos grupos pueden generar caos o violencia para mostrar que la democracia no garantiza el orden.

Finalmente, los actores internacionales, como organizaciones internacionales de partidos y organismos supranacionales, ejercen presión desde fuera del país para promover la instalación efectiva de la democracia. Estos actores externos son fundamentales para consolidar el régimen democrático durante momentos de conflicto e incertidumbre.

### Incetidumbre, élites políticas y pactos

Durante los procesos de democratización, la élite política juega un papel central. Está compuesta por individuos que se reconocen mutuamente como parte del cuerpo político de un país y se encargan de liderar la transición hacia la democracia, a menudo recurriendo a pactos.

La élite toma decisiones considerando el bien común, pero también buscando maximizar sus beneficios personales o grupales. En este período de incertidumbre, es vital discernir cuándo moderar ambiciones y cuándo arriesgar por el beneficio personal. La acción de los nostálgicos del régimen autoritario anterior exige que los políticos de diversos partidos acuerden reglas para controlar la lucha por el poder.

Estos pactos, que pueden ser secretos o públicos, establecen formas institucionales que garantizan condiciones equitativas para la competencia por el poder. Por ejemplo, pueden acordar que no habrá proscripciones, determinar la fecha de las elecciones o definir el sistema electoral.

La definición de estas reglas recae en los miembros de la élite política, que buscan establecer un sistema que permita la alternancia en el poder, evitando que un partido se perpetúe en el mismo o fuera de él.

Los pactos entre los líderes de diferentes partidos son fundamentales por dos razones: previenen que los nostálgicos del régimen autoritario intenten otro golpe de Estado y crean una red de contención para las demandas de la sociedad que surgen con el retorno de la democracia.

El modelo de pactos, en gran parte tomado del caso de la transición española, es considerado exitoso para garantizar una transición ordenada y contener posibles amenazas de regresión autoritaria.

En el caso de Argentina, hubo pactos limitados entre partidos políticos para alcanzar una democracia poliárquica, que respeta las reglas de competencia entre partidos, permite el ejercicio libre de derechos políticos, la competencia y alternancia en el poder, y la elección de gobernantes mediante voto popular transparente y universal.

A lo largo del siglo XX, Argentina experimentó varios golpes de Estado y alteraciones institucionales, pero las transiciones de 1973 y 1983 marcaron la consolidación del actual régimen democrático.

### La transición fallida de 1973

En 1971, el Ejército designó al general Agustín Lanusse para pactar una transición a la democracia, buscando controlar el proceso y abriendo negociaciones con todos los partidos políticos, incluido el peronismo. Sin embargo, la propuesta excluía a Juan D. Perón de las elecciones, lo que fue rechazado formalmente por los partidos, aunque se tejieron algunos acuerdos en este proceso.

Las negociaciones continuaron en 1972, con acuerdos parciales que condujeron a la sanción de una ley que establecía nuevas reglas para las elecciones y la aprobación del actual Código Electoral Nacional. A pesar del veto a la candidatura de Perón, regresó al país a finales de 1972 para cerrar acuerdos políticos con diferentes facciones.

En las elecciones de marzo de 1973, Héctor Cámpora, el candidato de Perón, resultó electo, pero pronto renunció anticipadamente al reconocer que su poder sería nulo ante el inminente regreso definitivo de Perón. Esto llevó a la convocatoria a nuevas elecciones en las que Perón pudo participar.

La situación política y económica empeoró durante estos años, marcada por la violencia política de derecha e izquierda y la crisis económica global del petróleo. Los años 1974 y 1975 fueron tumultuosos, con enfrentamientos internos en el peronismo y la clandestinidad de diversas organizaciones armadas.

La muerte de Perón en julio de 1974 exacerbó la violencia y para finales de 1975, los militares comenzaron a intervenir activamente en el conflicto con las organizaciones armadas, anticipando el golpe militar que se produciría el 24 de marzo de 1976. A pesar de los intentos de líderes políticos como Ricardo Balbín por evitarlo, el golpe de Estado se concretó, dando inicio a un nuevo período de dictadura militar en Argentina.

### La transición definitiva de 1983

Entre 1976 y 1983, Argentina estuvo bajo el gobierno autoritario de cuatro juntas militares que implementaron un plan de exterminio y represión. Sin embargo, con el tiempo, su poder fue menguando debido a fracasos económicos y crecientes denuncias por violaciones a los derechos humanos.

En 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA visitó Argentina y denunció las violaciones a los derechos humanos, lo que marcó el reconocimiento público de la existencia de desaparecidos por parte del gobierno militar. Además, la situación económica empeoraba, exacerbada por la crisis del petróleo y la falta de un proyecto económico coherente.

La dictadura intentó recuperar apoyo y unidad a través de la Guerra de las Malvinas en 1982, pero la derrota ante Gran Bretaña debilitó aún más al gobierno militar. La sociedad y la élite política, convencidas de la necesidad de un cambio, demandaban elecciones ante el colapso del poder militar.

El general Galtieri renunció tras la derrota en Malvinas, siendo reemplazado por el general Bignone, quien convocó a elecciones para 1983. Las reglas electorales se basaron en acuerdos de 1973, aunque con algunas modificaciones.

Raúl Alfonsín, un crítico del régimen saliente y opositor a la Guerra de Malvinas, ganó las elecciones de 1983. Durante su mandato, enfrentó desafíos constantes a la democracia, incluyendo intentos de golpes militares. A pesar de la ausencia de pactos sólidos más allá de las elecciones, se llevaron a cabo enjuiciamientos a los responsables de violaciones a los derechos humanos, lo que mantuvo en alerta a los sectores nostálgicos del régimen militar.

Durante el mandato de Carlos Menem, sucesor de Alfonsín, se consolidó la democracia política y se finalizó la transición. Menem reprimió a militares rebeldes y otorgó indultos que liberaron a militares juzgados en el gobierno de Alfonsín. A partir de ese momento, los militares dejaron de representar una amenaza para el poder civil y se consolidó la democracia en Argentina.

### **En conclusión**

En resumen, se puede identificar dos etapas en los procesos de transición democrática en Argentina. La primera etapa abarca desde la flexibilización de los controles autoritarios hasta la instalación del primer gobierno surgido de elecciones. Durante esta etapa, los militares salientes establecieron gran parte de las reglas electorales, y una vez que se instauró el poder civil, estas reglas no fueron modificadas.

En cuanto a la segunda etapa, la consolidación definitiva, se evidencia que la transición de 1973 no logró consolidarse plenamente, pero sentó las bases para el éxito de la transición de 1983. En este último proceso, la élite política logró acordar reglas mínimas de procedimiento democrático (poliarquía) que aún regulan el acceso al poder en Argentina en la actualidad. Esta consolidación marcó el fin de la amenaza de una regresión autoritaria y estableció la estabilidad democrática en el país.

# ***Texto: Breve historia contemporánea de la Argentina***

## ***(Romero)***



### **1966-1976 “Capítulo VI”**

- ❖ Gobierno de Juan Carlos Onganía.
- ❖ El Cordobazo.
- ❖ La vuelta de Perón .
- ❖ Presidencia de Isabel Perón y golpe militar.

### **Contexto internacional**

La Guerra Fría fue un conflicto geopolítico y económico que tuvo lugar principalmente después de la Segunda Guerra Mundial (1947-1991). Aunque no hubo enfrentamientos militares directos entre las dos superpotencias involucradas, Estados Unidos y la Unión Soviética, existió una intensa rivalidad y tensión ideológica, militar y política. Fue un conflicto ideológico entre el capitalismo representado por Estados Unidos y el comunismo representado por la Unión Soviética. Cada lado promovía su sistema político y económico como el mejor. En lugar de combatir directamente, las superpotencias apoyaron conflictos locales en todo el mundo, como la Guerra de Vietnam y la Guerra de Corea, donde financiaron y respaldaron bandos opuestos.

### **Gobierno de Juan Carlos Onganía**

El 28 de junio de 1966, se llevó a cabo un golpe militar en Argentina que derrocó al presidente *Arturo Umberto Illia*, marcando el inicio de lo que se autodenominó la "Revolución Argentina". *Juan Carlos Onganía* asumió la presidencia y lideró un gobierno militar caracterizado por su énfasis en el orden, la unidad y un fuerte anticomunismo. El nuevo régimen buscaba reorganizar el Estado, otorgándole más autoridad y recursos.

En su etapa inicial, el gobierno implementó un "shock autoritario" destinado a controlar una sociedad que tenía una vida cultural, política e intelectual activa. El parlamento fue disuelto, concentrando el poder en manos del presidente, y se confiscaron y vendieron los bienes de los partidos políticos. Los ministerios se redujeron, y se creó un Estado Mayor de la Presidencia con participación en los Consejos de Seguridad, Desarrollo Económico y Ciencia y Tecnología, considerando la planificación económica y la investigación científica como parte de la seguridad nacional.

La represión se extendió a la universidad, vista como un foco de comunismo, resultando en la intervención y la eliminación de su autonomía, marcada por el episodio conocido como "La noche de los bastones largos" en 1966, un episodio de violencia policial en las facultades de la UBA. Además, se aplicó censura a varias manifestaciones culturales y sociales, como las minifaldas, el pelo largo, el amor libre y el divorcio, que eran vistas por la iglesia como expresiones de los males del comunismo.

En cuanto a la política económica, el gobierno no definió claramente su rumbo en los primeros seis meses, pero luego prevalecieron las políticas liberales. *Vasena*, afín a grupos empresariales, fue nombrado Ministro de Economía y Trabajo. En 1967, *Vasena* presentó un plan económico que congeló salarios, tarifas y combustibles por dos años y redujo el déficit fiscal mediante la racionalización de la administración pública. Se llevaron a cabo inversiones estatales significativas, especialmente en obras públicas, pero la política económica favoreció principalmente a sectores económicos concentrados, en su mayoría extranjeros, lo que resultó en una mayor desnacionalización de la economía. Sectores rurales y empresarios nacionales se vieron perjudicados por las fuertes retenciones a la exportación, y las economías provinciales también sufrieron impactos negativos. A pesar de autodenominarse "liberales", la política económica mantuvo un alto grado de intervención estatal.

Con el tiempo, las tensiones sociales aumentaron, y surgieron nuevas corrientes y protestas en busca de alternativas más justas, nacionalistas y populares. Las tensiones entre *Onganía* y su ministro de economía, *Vasena*, se intensificaron, y *Onganía* reemplazó al comandante del ejército, *Alsogaray*, por *Alejandro Lanusse*. Otros sectores políticos comenzaron a quejarse del excesivo autoritarismo de *Onganía* y a considerar una salida política, encabezada por el general *Aramburu*. En mayo de 1969, el movimiento de protesta conocido como "El Cordobazo" estalló con fuerza, debilitando la autoridad de *Onganía* y marcando el declive de su régimen.

### La primavera de los pueblos (El cordobazo)

El estallido que tuvo lugar en Córdoba en mayo de 1969, conocido como "El Cordobazo", fue un episodio emblemático en la historia de Argentina que marcó un punto de inflexión en la lucha social y política de ese período. Precedido por una serie de protestas estudiantiles que se extendieron por varias universidades del país, este movimiento se caracterizó por la convergencia del activismo estudiantil y obrero el 29 de mayo de 1969.

La Confederación General del Trabajo (CGT) local desempeñó un papel crucial al convocar a una huelga general, lo que llevó a grupos de estudiantes y trabajadores a tomar el control del centro de la ciudad de Córdoba, atrayendo a una multitud considerable de participantes. En este contexto, la represión policial desencadenó un violento enfrentamiento en las calles de la ciudad. Se erigieron barricadas y se encendieron hogueras para contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos, mientras que algunos comercios fueron asaltados en medio de la agitación.

Es importante destacar que esta multitudinaria manifestación carecía de consignas claras y no estaba organizada por sindicatos, partidos políticos ni centros estudiantiles. De hecho, estos últimos se vieron desbordados por la espontaneidad y la magnitud de la acción. Eventualmente, el Ejército intervino para restaurar el orden, poniendo fin a los disturbios el 31 de mayo de 1969. Sin embargo, el costo humano fue significativo.

El Cordobazo marcó el inicio de una ola de movilización social que perduró hasta 1975. Esta ola se manifestó de diversas maneras a lo largo de ese período, y una de las más notables fue el surgimiento de un nuevo activismo sindical en Argentina.

Las explosiones urbanas que se desataron tras el Cordobazo no fueron eventos aislados, sino que se convirtieron en un fenómeno recurrente en las manifestaciones callejeras de la época, atrayendo también la participación activa de estudiantes universitarios. Estas formas originales de protesta solían ser desencadenadas por eventos puntuales, como un aumento de impuestos, tarifas o la actuación de funcionarios que se percibían como particularmente perjudiciales. Sin embargo, detrás de estas manifestaciones ocasionales subyacía un descontento profundo y un conjunto de demandas que, debido a la censura y la represión del poder autoritario, encontraban su expresión en los rincones más recónditos de la sociedad, como villas, barrios y pequeñas ciudades.

El grupo que lideraba estas protestas era heterogéneo en cuanto a sus integrantes, pero unido por un objetivo común. Además, se sumaban a estas voces otras fuerzas sociales, como los grandes productores rurales y sectores empresariales nacionales, que compartían el descontento y las demandas del movimiento. Juntos, contribuyeron a forjar un imaginario social que se asemejaba a una especie de "primavera de los pueblos". Este imaginario social fue ganando terreno y confianza a medida que la sociedad civil descubría la falta de respuestas por parte de las autoridades. En este contexto, todos los males de la sociedad parecían converger en un punto central: el poder autoritario y los grupos minoritarios que lo respaldaban. Se los consideraba responsables directos de todas las formas de opresión, explotación y violencia que aquejaban a la sociedad en ese momento.

En el contexto latinoamericano, la figura del *Che Guevara* y su acción en Bolivia dejaron una huella significativa que ilustró tanto las posibilidades como los límites del enfoque revolucionario. La muerte del *Che Guevara*, aunque marcó el fin de su lucha, se convirtió en un símbolo poderoso para aquellos que luchaban por la liberación en América Latina. A lo largo de la región, se alinearon diversos movimientos guerrilleros urbanos, como los de Brasil y Uruguay, que buscaban desafiar regímenes autoritarios.

Incluso la Iglesia se involucró, al menos en parte, en esta efervescencia social. En Argentina, a partir de 1968, un grupo de religiosos se unió en el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, acompañados por laicos comprometidos. Trabajaron en las áreas más empobrecidas, promovieron la creación de organizaciones solidarias y lideraron reclamos y acciones de protesta, incluyendo huelgas de hambre. Su solidaridad con el pueblo los llevó, de manera natural, a identificarse con una creencia básica: el peronismo. Para muchos, especialmente jóvenes sin experiencia política previa, el peronismo proscripto y resistente se convirtió en un espacio atractivo para la protesta y la oposición.

El peronismo, tanto en su pasado como en su presente, fue un terreno fértil para la construcción de diversas imágenes y discursos. Sin una ortodoxia única que lo legitimara, el peronismo se mostró permeable a múltiples influencias, que iban desde el catolicismo y el nacionalismo hasta el revisionismo histórico y la izquierda. *Perón*, desde su exilio en España, alentó la formación de grupos armados que desafiaron a la dictadura de la llamada "revolución argentina".

La experiencia de la Revolución Cubana sirvió de inspiración para la creación de las primeras organizaciones armadas en Argentina. Aparecieron organizaciones peronistas, marxistas y comunistas revolucionarias. En 1970, emergió un grupo compuesto por jóvenes nacionalistas católicos con inclinaciones peronistas.



Por otro lado, la izquierda ofrecía una lectura más clásica de la movilización y sus posibilidades, enfocándose en el "clasismo" sindical, que tenía una fuerte presencia, especialmente en Córdoba. La diversidad de enfoques y actores en este período reflejaba la complejidad y la intensidad del proceso de movilización social en Argentina.

Los discursos políticos que predominaban en esta época en Argentina se caracterizaban por una fusión de elementos del marxismo revolucionario, el nacionalismo y el catolicismo tercermundista. Estos discursos se alimentaban de la experiencia de la "primavera de los pueblos" y la utilizaban para fortalecer y legitimar la narrativa popular, respaldándola con referencias teóricas sólidas.

En estos discursos, se sostenía que la clave de la opresión, la injusticia y la explotación residía en el poder, que estaba en manos de unos pocos. Tanto los nacionalistas como los trotskistas compartían esta visión conspirativa, que consideraba que desde el poder se podía orquestar cualquier tipo de abuso, manipulación y explotación de la sociedad. En este contexto, el objetivo fundamental de la acción política se centraba en la toma del poder como la única vía para lograr un cambio significativo.

Esta perspectiva tenía un matiz beligerante, ya que interpretaba la política como una lucha constante y una confrontación en la que todo valía. La lógica de la guerra impregnaba todas las acciones políticas, lo que condujo al surgimiento de organizaciones armadas y movimientos revolucionarios dispuestos a tomar medidas extremas para cambiar el statu quo.

En la década de 1960, las primeras organizaciones guerrilleras en Argentina comenzaron a surgir, en parte inspiradas por la Revolución Cubana y posteriormente reactivadas por la acción del *Che Guevara* en Bolivia. Sin embargo, su verdadero terreno fértil se encontraba en el contexto de la creciente experiencia autoritaria en el país y la creencia de que la acción armada era la única alternativa viable. A partir de 1967, dentro de los sectores de la izquierda y el peronismo, comenzaron a surgir diversos grupos guerrilleros, cada uno con sus propias orientaciones ideológicas y objetivos.

Entre estos grupos se encontraban las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), los descamisados, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), y, hacia 1970, dos organizaciones que tuvieron un impacto significativo: Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Montoneros surgió de un trasfondo integracionista que combinaba elementos católicos, nacionalistas y peronistas, mientras que el ERP estaba vinculado al grupo trotskista del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

El acto oficial que marcó la entrada de estos grupos en la vida pública fue el secuestro y asesinato del general *Aramburu* en mayo de 1970, llevado a cabo por Montoneros. A partir de entonces y hasta 1973, la violencia se incrementó tanto en términos de cantidad como en espectacularidad. Muchas de estas acciones estaban relacionadas con el abastecimiento de las organizaciones, incluyendo armas, dinero y suministros médicos. Otras acciones, como los copamientos, buscaban demostrar el poderío de estas organizaciones y exponían la impotencia del Estado. También se llevaron a cabo acciones de "expropiación" y redistribución de recursos entre los pobres.

En muchos casos, estas acciones procuraban insertarse en los conflictos sociales existentes y profundizarlos, como el secuestro de empresarios o gerentes en medio de huelgas. A pesar de las diferencias entre las diversas organizaciones guerrilleras, todas compartían la aspiración de transformar la movilización espontánea de la sociedad en un levantamiento generalizado. Además, compartían una cultura política que se inspiraba en la de grupos de izquierda, pero que de alguna manera también adoptaba elementos de sus adversarios.

La violencia no solo se justificaba como respuesta a la violencia del adversario, sino que era glorificada como un medio para dar a luz a un nuevo orden. Los atributos del verdadero militante eran el heroísmo y la disposición a una muerte gloriosa y redentora "entre los héroes de la patria amada". De todas las organizaciones guerrilleras, Montoneros fue la que mejor se adaptó al clima político y social de Argentina, absorbiendo gradualmente a la mayoría de las otras organizaciones.

### Militares en retirada

A medida que la movilización popular continuaba creciendo en Argentina, se establecía cada vez más una identificación entre el movimiento y el peronismo, así como con el propio *Juan Domingo Perón*. Hacia 1971, *Perón* había recuperado una posición política central en Argentina, casi tan influyente como la que había tenido durante su presidencia. Esta creciente afinidad entre el movimiento popular y el peronismo dejó a las Fuerzas Armadas impotentes y desconcertadas, ya que se encontraban en una situación difícil de controlar.

Las Fuerzas Armadas comenzaron a darse cuenta de que necesitaban encontrar una salida a la compleja situación política en la que se encontraban. En su retirada estratégica, se vieron obligadas a iniciar negociaciones con diversas fuerzas sociales y políticas para definir los términos de su intervención en la política nacional. Esta búsqueda de una solución negociada reflejaba la comprensión de que la movilización popular y el resurgimiento del peronismo no podían ser ignorados ni reprimidos de manera efectiva por la fuerza militar, y que era necesario un enfoque político más sutil para resolver la crisis en curso.

En mayo de 1969, la autoridad del presidente *Onganía* se debilitó significativamente debido a la incapacidad para hacer frente al creciente desafío social y a las dudas que surgieron dentro del propio Ejército sobre la represión de las protestas. Además, se sintieron las consecuencias en el ámbito económico, con una rápida fuga de capitales extranjeros y el resurgimiento de las expectativas de inflación. Ante estas dificultades, *Onganía* intentó realizar modificaciones menores y una mayor apertura hacia lo que él denominaba "lo social", especialmente con respecto a la Confederación General del Trabajo (CGT) y sus líderes "participacionistas". Sin embargo, el clima político había cambiado drásticamente: los sindicalistas eran menos complacientes y los empresarios expresaban abiertamente su desconfianza hacia las políticas populistas.

Los productores rurales también intensificaron sus protestas y entraron en conflicto con los frigoríficos extranjeros, que parecían estar protegidos por el gobierno. *Onganía* se encontraba cada vez más aislado dentro de las propias Fuerzas Armadas. La muerte de *Aramburu* suscitó sospechas de que ciertos sectores cercanos al presidente podrían estar

implicados en el asesinato. Estos factores contribuyeron a que, a principios de junio de 1970, los militares decidieran destituir a *Onganía* y nombrar como presidente al general *Roberto Marcelo Levingston*, una figura relativamente desconocida.

*Levingston* gobernó hasta marzo de 1971 y demostró tener ideas propias, que diferían significativamente de las del general *Lanusse*, una figura destacada en la Junta Militar. Sus ideas estaban más alineadas con el grupo de oficiales nacionalistas. Nombró como ministro de Obras Públicas y luego como ministro de Economía a *Aldo Ferrer*, quien buscó revivir una fórmula de corte nacionalista y populista. El gobierno protegió a los sectores empresariales nacionales y buscó crear las condiciones para una transición política y democrática adecuada. *Levingston* convocó a negociaciones, lo que revitalizó a la debilitada CGT, y al mismo tiempo, los partidos políticos tradicionales, con el apoyo del general *Lanusse*, comenzaron a regresar al escenario político.

A finales de 1970, la mayoría de los partidos firmaron un documento conocido como "La Hora del Pueblo", en el que se comprometían a poner fin a las proscripciones electorales y garantizar el respeto a las minorías y a las normas constitucionales en un futuro gobierno elegido democráticamente. Tanto radicales como peronistas ofrecían a la sociedad la posibilidad de una convivencia política aceptable y representaban una vía hacia una transición política democrática en Argentina.

El resurgimiento tanto del sindicalismo organizado como de los partidos políticos en Argentina se debió en parte a la apertura política que buscaba implementar un gobierno que estaba tratando de encontrar una salida a la crisis. Sin embargo, el factor más determinante en este resurgimiento fue la emergencia de la creciente movilización social, que indirectamente revitalizó a estas instituciones.

El presidente *Levingston* se encontró con numerosos obstáculos al intentar manejar el espacio de negociación que se estaba abriendo. Fue objeto de críticas y hostilidades por parte del "establishment económico" y se enfrentó con los partidos políticos, con los cuales inicialmente no deseaba negociar. También tuvo tensiones con la CGT y llegó a enfrentarse con los empresarios nacionales. Estas dificultades hicieron evidente que *Levingston* era tan incapaz como su predecesor, *Onganía*, para encontrar una solución viable a la crisis política y social en Argentina.

Cuando en marzo de 1971 se produjo una nueva movilización masiva en Córdoba, los jefes militares tomaron la decisión de remover a *Levingston* y reemplazarlo por el general *Lanusse*. *Lanusse* asumió la presidencia con la tarea de gestionar un proceso de transición hacia un gobierno democrático, entendiendo que la situación requería una estrategia política más sólida y un enfoque más pragmático para abordar las demandas de la sociedad.

En marzo de 1971, el general *Lanusse* anunció una medida crucial para la política argentina: el restablecimiento de la actividad política partidaria y la futura convocatoria a elecciones generales. Sin embargo, esta convocatoria estaría subordinada a un Gran Acuerdo Nacional, lo que implicaba que las Fuerzas Armadas mantendrían un control significativo sobre el proceso político.

Las Fuerzas Armadas, en ese momento, optaron por dar prioridad a una solución política para la crisis que enfrentaba el país. Buscaban reconstruir el poder y la legitimidad del Estado, que se encontraba cada vez más debilitado debido a las tensiones sociales y políticas.

Sin embargo, había discrepancias significativas dentro de las Fuerzas Armadas sobre cómo abordar la creciente protesta social y las organizaciones armadas que operaban en el país. Estas diferencias anticipaban dilemas y tensiones futuras en el manejo de la crisis. Algunos sectores del Estado y las Fuerzas Armadas comenzaron a recurrir a la represión ilegal, incluyendo secuestros, torturas y desapariciones de militantes, así como asesinatos indiscriminados.

Este período también estuvo marcado por problemas económicos significativos, como una inflación descontrolada, la fuga de divisas, la caída del salario real y un aumento en el desempleo. Estos factores contribuyeron aún más a la agitación social y política en Argentina, y crearon un contexto de profunda inestabilidad.

El Gran Acuerdo Nacional (GAN) comenzó como una iniciativa de negociación amplia, pero pronto se convirtió en un enfrentamiento entre el general *Lanusse* y *Juan Domingo Perón*. La propuesta inicial del gobierno contemplaba varios aspectos, incluyendo una condena general de la "subversión", garantías sobre la política económica y el compromiso de respetar las normas democráticas. Además, se aseguraba a las Fuerzas Armadas un lugar institucional en el futuro régimen, desde el cual podrían tutelar la seguridad del país.

En 1971, *Perón* relevó a *José López Rega* y lo reemplazó por *Héctor J. Cámpora* como su delegado personal. *Cámpora* se caracterizó por su total subordinación a la voluntad de *Perón*, lo que lo convirtió en un candidato presidencial afín a los intereses del líder peronista.

En 1972, *Lanusse* tomó la decisión de asegurar una condición mínima para llegar a un acuerdo con *Perón*: que este último no se postularía como candidato a la presidencia, a cambio de la autoproscripción de *Lanusse*. Tácitamente, *Perón* aceptó estas condiciones. En noviembre de 1972, *Perón* regresó a Argentina por un breve período de tiempo. Durante su visita, cultivó una imagen pacificadora, habló sobre cuestiones globales como los problemas ecológicos y evitó hacer declaraciones provocadoras.

Finalmente, *Perón* organizó su combinación electoral bajo el nombre del Frente Justicialista de Liberación. Impuso como fórmula presidencial a *Héctor J. Cámpora*, su delegado personal, y a *Vicente Solano Lima*, un político conservador que había respaldado a los peronistas desde 1955. *Perón* lanzó una campaña electoral desafiante con el lema "Cámpora al gobierno, Perón al poder". Los radicales, con la candidatura de *Ricardo Balbín*, aceptaron la victoria peronista y asumieron su futuro papel como minoría legitimadora.

En 1973, el peronismo ganó las elecciones con casi el 50% de los votos, y *Héctor J. Cámpora* asumió la presidencia, marcando el retorno del peronismo al poder en Argentina. Este proceso electoral marcó un hito importante en la historia política del país, ya que

representó el restablecimiento de la democracia y el regreso de *Juan Domingo Perón* a la política argentina.

*Juan Domingo Perón* era una figura emblemática en la política argentina que inspiraba una amplia gama de sentimientos y percepciones en la sociedad. Para muchos, *Perón* encarnaba un sentimiento nacionalista y popular que surgía como reacción contra la desnacionalización y los privilegios que se habían experimentado en el país en el pasado reciente.

Para algunos, especialmente aquellos que habían sido testigos de la historia de Argentina desde sus primeros años de liderazgo, *Perón* representaba al líder histórico que había dejado una marca indeleble en la nación. Su imagen estaba asociada con la recuperación de la dignidad y la identidad nacional.

Para una generación más joven, *Perón* era visto como un líder revolucionario del Tercer Mundo, que tenía la capacidad de eliminar a los traidores dentro de su propio movimiento y liderar un proceso de liberación, ya sea a nivel nacional o social. Estos jóvenes creían que *Perón* podía potenciar las posibilidades del pueblo argentino y llevar a cabo cambios significativos en la sociedad.

Por otro lado, muchos sectores de las clases medias y altas veían a *Perón* como un pacificador. Lo percibían como alguien que priorizaba el término "argentino" sobre "peronista" y que tenía la capacidad de gestionar los conflictos dentro de la sociedad. Para ellos, *Perón* representaba la figura que podía llevar a cabo la reconstrucción del país y dirigirlo hacia un camino de crecimiento y desarrollo, aspirando a la "Argentina potencia".

Estas percepciones múltiples de *Perón* reflejan la complejidad de su legado y su impacto en la política y la sociedad argentina. Su figura era polifacética y sus seguidores tenían diferentes expectativas y esperanzas en relación con su liderazgo y su capacidad para transformar el país.

### 1973: un balance

Desde el punto de vista económico, el país experimentó un desempeño medianamente satisfactorio, que duró aproximadamente hasta 1975. Uno de los aspectos más destacados fue el crecimiento del sector agropecuario en la región pampeana. El Estado promovió este cambio a través de créditos y subsidios para inversiones, así como mediante el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Sin embargo, la política económica aún mantenía su enfoque tradicional de transferencia de recursos a la economía urbana.

Lo que resultó fundamental para el crecimiento fue la modernización general de la economía. La producción local de tractores y cosechadoras permitió una mecanización completa de la agricultura y cambios significativos en el almacenamiento y transporte de productos agrícolas. Esta modernización aumentó las exportaciones de granos y aceites, aunque los mercados de carne experimentaron estancamiento o retroceso. Esto redujo el impacto de las crisis cíclicas y brindó margen para el crecimiento industrial. El sector industrial creció sostenidamente después de la gran crisis de 1963. Parte de este

crecimiento se debió a inversiones realizadas después de 1958, y también a la expansión del empleo industrial y la construcción, junto con una recuperación en los ingresos de los asalariados.

Sin embargo, hacia 1973, este crecimiento se aproximaba a los límites de la capacidad instalada debido a la falta de inversión privada significativa. La fuerte conflictividad social no podía resolverse fácilmente mediante una redistribución de recursos, como proponía *Juan Domingo Perón*.

La experiencia del general *Onganía* mostró las dificultades incluso para las Fuerzas Armadas, que tendían a identificar su propia estructura con la del Estado. Los sindicatos conservaron su poder después de 1955, lo que demostró la resistencia del movimiento laboral.

Quienes confiaron en *Perón* en 1973 esperaban que pudiera controlar la movilización social y disciplinar a aquellos que buscaban ventajas corporativas. El acuerdo entre la Confederación General Económica (CGE) y la Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó a esbozar la idea del pacto social y la negociación entre las principales corporaciones.

Sin embargo, en el ámbito político, había más incertidumbre que en el económico, a pesar de los resultados electorales de marzo. Los partidos políticos que debían ocupar el espacio democrático no inspiraban una gran confianza. El Partido Justicialista (PJ) apenas existía como entidad independiente dentro del Movimiento Peronista. La Hora del Pueblo, que había desempeñado un papel importante en las elecciones, no logró establecerse como un espacio de discusión y negociación efectivo. Otros partidos, como la Unión Cívica Radical, se sintieron abrumados por la culpa de la proscripción y aceptaron los términos de *Perón* sin cuestionar su liderazgo.

La democracia y la representación política tenían poco prestigio en una sociedad acostumbrada a que cada grupo negociara por separado con el poder establecido. Esto creó un desafío significativo para la construcción de un sistema democrático sólido. Los sectores propietarios se sentían más representados por sus organizaciones corporativas, mientras que los sectores populares carecían de una representación efectiva en la política tradicional.

Estos factores contribuyeron a que, a pesar de la espectacular experiencia electoral de 1973, la democracia enfrentara obstáculos en su consolidación. La movilización social, aunque contenía elementos de participación, también estaba marcada por una cultura política que veía el poder como el enemigo y la represión como la respuesta, a menos que se pudiera "tomar" ese poder para reprimir al enemigo. Las organizaciones armadas se insertaron en este movimiento popular, pero al hacerlo, introdujeron un sesgo en su desarrollo. La movilización popular se convirtió en parte de una máquina de guerra y fue alejada de la alternativa democrática.

### La vuelta de Perón

El 25 de mayo de 1973, *Héctor J. Cámpora* asumió la presidencia de Argentina. Su mandato fue breve, y el 20 de junio de ese mismo año, *Juan Domingo Perón* regresó al

país después de su exilio. La llegada de *Perón* fue recibida con entusiasmo por una inmensa multitud que se congregó en Ezeiza. Sin embargo, durante este evento, se produjo un enfrentamiento violento entre grupos armados de diferentes tendencias dentro del peronismo, lo que resultó en una tragedia conocida como la "Masacre de Ezeiza".

El 13 de julio de 1973, tanto *Héctor J. Cámpora* como el vicepresidente *Vicente Solano Lima* presentaron su renuncia. Ante la ausencia del titular del Senado, la presidencia fue asumida por *Raúl Lastiri*, quien se desempeñaba como secretario privado de *Perón* y ministro de Bienestar Social en ese momento.

En septiembre de 1973, se llevaron a cabo nuevas elecciones presidenciales, y la fórmula compuesta por *Juan Domingo Perón* como presidente y su esposa *Isabel* como vicepresidenta obtuvo una victoria abrumadora, con el 62% de los votos.

Sin embargo, la presidencia de *Juan Domingo Perón* fue efímera, ya que falleció el 1 de julio del año siguiente, en 1974. *Isabel Perón* asumió la presidencia tras la muerte de su esposo y gobernó hasta que fue depuesta por los líderes militares el 24 de marzo de 1976. Este evento marcó el inicio de un período oscuro en la historia de Argentina conocido como la "última dictadura militar" o el "Proceso de Reorganización Nacional".

La presidencia de *Juan Domingo Perón* durante su tercer mandato (1973-1974) estuvo basada en tres pilares fundamentales: un acuerdo democrático con las fuerzas políticas, un pacto social con los principales actores corporativos y una mayor centralización de su movimiento político.

En cuanto al acuerdo democrático, *Perón* buscaba establecer un ambiente político en el que diferentes fuerzas políticas pudieran coexistir y participar en el proceso político de manera constructiva. Sin embargo, a pesar de que este acuerdo funcionó formalmente, no logró construir una oposición eficiente que pudiera equilibrar el poder y proporcionar un contrapeso político necesario.

El pacto social, por su parte, tenía como objetivo alcanzar un consenso entre los grandes representantes corporativos, incluyendo a sindicatos y empresarios, para mantener la estabilidad social y económica. Sin embargo, este pacto comenzó a desmoronarse desde el principio y terminó fracturándose. Los conflictos laborales y las tensiones económicas fueron desafíos constantes para la estabilidad que *Perón* buscaba mantener.

La centralización del movimiento peronista fue otra característica importante de su tercer mandato. *Perón* trató de unificar y consolidar el liderazgo de su movimiento, que previamente había estado dividido en múltiples facciones y estrategias. Sin embargo, este proceso de centralización también generó tensiones internas y divisiones dentro del propio movimiento peronista.

El Programa de Reconstrucción y Liberación Nacional presentado en mayo de 1973 por *Juan Domingo Perón* buscaba abordar las limitaciones al crecimiento económico de Argentina sin alterar sus rasgos fundamentales. Este programa fue desarrollado con la colaboración de *José Ber Gelbard*, un exitoso empresario ajeno al peronismo, quien lideraba la Confederación General Económica (CGE).

El programa tenía objetivos fuertemente intervencionistas, nacionalistas y distribucionistas, y no implicaba un ataque directo a los intereses establecidos. Se pretendía impulsar el crecimiento económico a través de dos vías principales: la expansión del mercado interno y el aumento de las exportaciones.

En el ámbito de las exportaciones, se esperaba que Argentina se beneficiara de los buenos precios de los productos de exportación y de la posibilidad de acceder a nuevos mercados, como la Unión Soviética. La nacionalización del comercio exterior tenía como objetivo asegurar que parte de los beneficios se transfirieran al sector industrial sin afectar significativamente a los sectores rurales. Se buscaba continuar expandiendo las exportaciones industriales mediante acuerdos especiales y el respaldo a las empresas nacionales con líneas de crédito específicas.

Para estimular el mercado interno, se aumentaron los gastos del Estado a través de obras sociales, la creación de empleos públicos y la expansión de empresas estatales. Estas medidas contribuyeron a activar la economía interna, aunque también generaron un déficit fiscal creciente.

La clave del programa residía en el llamado "pacto social", un mecanismo que buscaba resolver la lucha distributiva entre diferentes sectores económicos. En lugar de utilizar una autoridad puramente coercitiva, como lo intentó el gobierno de *Onganía* sin éxito, *Perón* optó por la concertación, un enfoque basado en la persuasión y la autoridad del Estado para disciplinar a los actores económicos y mantener la estabilidad.

Los primeros resultados de este programa fueron positivos, ya que logró frenar la inflación de manera significativa, mejorar los salarios y estimular la actividad económica interna. Sin embargo, con el tiempo, la eficacia del programa comenzó a debilitarse debido a tensiones económicas y políticas.

La situación económica en Argentina comenzó a deteriorarse a partir de diciembre de 1973. El aumento del consumo provocó un resurgimiento de la inflación, y los precios del petróleo en el mercado mundial se incrementaron, encareciendo las importaciones. Además, las exportaciones de carne argentina se vieron afectadas por el cierre del Mercado Común Europeo. Estos problemas económicos crearon una crisis cíclica que desafiaba la promesa del gobierno de mantener la "inflación cero".

El Pacto Social, que se había concebido para regular de manera equitativa la distribución de los costos de esta crisis, demostró ser ineficaz. A pesar de las regulaciones cada vez más numerosas, el Estado tenía dificultades para hacer valer su autoridad y controlar a los actores económicos. Los empresarios encontraron formas de eludir el pacto a través de prácticas como el desabastecimiento, la fijación de precios elevados, el mercado negro y las exportaciones clandestinas. La inversión privada en la economía fue relativamente baja.

Además, los sindicalistas carecían de experiencia, herramientas y objetivos para participar efectivamente en la cogobernabilidad. La movilización constante de los trabajadores dificultaba sus negociaciones y su capacidad para tomar decisiones libremente.

La segunda fase del gobierno peronista (que tenía como presidenta a *Isabel*) estuvo marcada por un cambio en la estrategia de los actores políticos y una reanudación de la



lucha distributiva tradicional. En la CGT, los partidarios de la negociación dura se hicieron más influyentes, lo que aumentó las tensiones en el movimiento sindical. La presidenta *Isabel Perón* intentó consolidar su propio poder rodeándose de un grupo leal, aunque carecían de una larga tradición en el peronismo. A pesar de sus intentos por capitalizar la herencia simbólica de *Juan Domingo Perón*, su política se alejó de la que había delineado el líder en sus últimos años.

La crisis económica se agudizó en 1975, con graves problemas en la balanza de pagos, alta inflación y una puja distributiva intensificada. El Estado se encontraba desbordado y la presidenta decidió convocar a paritarias en medio de esta situación crítica. El ministro de Economía, *Celestino Rodrigo*, aplicó un shock económico en junio de 1975, incluyendo una devaluación del 100% y aumentos de tarifas y combustibles. Esto generó una fuerte resistencia por parte de los trabajadores, con movilizaciones en la Plaza de Mayo y un paro general de 48 horas.

En este contexto de crisis económica y tensiones sociales, el gobierno de *Isabel Perón* perdió apoyo tanto de las Fuerzas Armadas como de los grandes empresarios, quienes empezaron a distanciarse de la presidenta. Los empresarios cedieron fácilmente a las demandas sindicales, lo que contribuyó al caos económico. Las rupturas en los acuerdos construidos por *Perón* y la falta de respaldo llevaron al gobierno a su fase final en julio de 1975. La situación política y económica se deterioró aún más, allanando el camino para el golpe militar de 1976.

El golpe militar que tuvo lugar el 24 de marzo de 1976 marcó un punto de quiebre en la historia argentina. El general *Videla*, quien asumió como comandante en jefe, había estado esperando el momento adecuado para tomar el poder y finalmente lo hizo mientras la crisis económica y política del gobierno de *Isabel Perón* se agravaba.

Después de la renuncia de funcionarios clave como *López Rega* y *Rodrigo*, se intentó una salida política con *Luder*, presidente del Senado, como breve reemplazo de *Isabel*. Sin embargo, esta solución no se consolidó, y el Congreso tampoco pudo encontrar una forma efectiva de remover a la presidenta.

El retorno de *Isabel* a la presidencia no solo cerró la posibilidad de una salida política sino que también exacerbó la ya grave crisis política y económica. La sociedad argentina estaba sumida en una situación de tensión insostenible, y había un fuerte deseo de poner fin a la inestabilidad.

El golpe militar fue recibido por la población con un sentido de alivio y, en muchos casos, con expectativas de que los militares pudieran poner orden en la situación. Sin embargo, lo que siguió fue una de las épocas más oscuras de la historia argentina, con violaciones sistemáticas de los derechos humanos, desapariciones forzadas y represión brutal contra aquellos que eran considerados opositores al régimen militar.



## 1976-1983 “Capítulo VII”

### ❖ Proceso de Reorganización Nacional.

- ❖ Economía imaginaria y real.
- ❖ Frente opositor y problemas internos.
- ❖ Guerra de Malvinas.
- ❖ La vuelta de la democracia.

## Introducción

El 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general *Jorge Rafael Videla*, el almirante *Emilio Eduardo Massera* y el brigadier *Orlando Ramón Agosti*, se hizo cargo del poder, dictó los instrumentos legales del llamado “Proceso de Reorganización Nacional” y designó presidente de la Nación al general *Videla*. En 1981, fue reemplazado por el general *Roberto Viola*, quien renunció a fines de ese año. Su sucesor, el general *Leopoldo Galtieri*, renunció a mediados de 1982, luego de la derrota en la guerra de Malvinas. El general *Reynaldo Bignone* convocó a elecciones en octubre de 1983 y entregó el mando al presidente electo, *Raúl Alfonsín*, el 10 de diciembre de ese año.

## El Estado Terrorista

El golpe militar de 1976 en Argentina tuvo como objetivo principal eliminar lo que los militares consideraban como problemas fundamentales en la sociedad argentina. Para ellos, la raíz de los problemas residía en la sociedad misma y en la persistencia de conflictos irresolubles. Este enfoque se reflejaba en la terminología utilizada por los militares, como las metáforas de "enfermedad", "tumor" y "extirpación", que sugerían una solución radical y definitiva.

La operación de represión que se llevó a cabo fue integral y cuidadosamente planificada por los líderes militares. Se ensayó y luego se ejecutó de manera sistemática en todo el país. Los comandantes militares concentraron el control de la acción en sus manos y disolvieron o subordinaron a los grupos parapoliciales que habían operado en años anteriores. Cada una de las tres ramas militares se responsabilizó de diferentes áreas geográficas, lo que dio lugar a una coordinación fraccional de la operación. A pesar de esta aparente anarquía interna, la operación se llevó a cabo de manera organizada y no fue una serie de acciones casuales o descontroladas.

Las órdenes se transmitieron a través de la cadena de mando hasta los Grupos de Tareas, que eran unidades encargadas de la ejecución. Estos grupos estaban compuestos principalmente por oficiales jóvenes, con la participación de algunos suboficiales, policías y civiles. La represión implicó la detención, tortura y desaparición forzada de miles de personas, así como la creación de complejos aparatos administrativos para llevar un registro de los movimientos de un gran número de víctimas.

La represión durante el régimen militar argentino se caracterizó por ser una acción terrorista clandestina que seguía un patrón sistemático y brutal. Esta acción se dividía en cuatro momentos principales: secuestro, tortura, detención y ejecución.

El secuestro solía llevarse a cabo preferentemente durante la noche en los domicilios de las víctimas, muchas veces a la vista de sus familias, que en algunos casos también eran

incluidas en la operación. Sin embargo, también se realizaron detenciones en lugares de trabajo, en la calle y, en algunos casos, en países vecinos. Después del secuestro, se procedía al saqueo de la vivienda de la víctima.

El siguiente paso era la tortura, que era sistemática y prolongada. La tortura tenía varios propósitos: obtener información sobre compañeros, lugares y operaciones, pero también tenía como objetivo quebrar la resistencia del detenido, anular sus defensas, destruir su dignidad y su personalidad. Muchas personas murieron bajo tortura, y aquellos que sobrevivieron pasaban a una detención en alguno de los centros clandestinos de detención.

Muchas mujeres detenidas estaban embarazadas y dieron a luz en condiciones inhumanas en estos centros. En muchos casos, los secuestradores se apropiaban de los hijos nacidos en cautiverio o los entregaban a conocidos. Para la mayoría de las personas detenidas, el destino final era la ejecución. A pesar de que la Junta Militar estableció la pena de muerte, todas las ejecuciones fueron realizadas en secreto. En la mayoría de los casos, los cadáveres se ocultaban, lo que llevó a la denominación de "desaparecidos" en lugar de "muertos".

El terrorismo de Estado se centró en perseguir y desaparecer a un amplio espectro de personas, desde militantes de organizaciones armadas hasta activistas políticos, sindicales, sociales, religiosos, intelectuales y ciudadanos comunes.

El objetivo principal era instaurar el miedo en la sociedad, controlar cualquier forma de disidencia y eliminar cualquier expresión de pensamiento crítico. Esto se llevó a cabo mediante la aplicación sistemática de la tortura, el secuestro, la desaparición forzada y el asesinato. La represión no solo tuvo como objetivo a los individuos en sí, sino que también buscaba eliminar cualquier rastro de su existencia, creando una sensación de terror y silencio.

El Estado operó de manera desdoblada, con una parte clandestina y terrorista que llevaba a cabo las desapariciones y la represión brutal, y otra parte pública que intentaba justificar estas acciones mediante un orden jurídico que el propio régimen militar estableció.

No sólo desaparecieron las instituciones democráticas, sino que también se impuso una represión autoritaria en la esfera pública. Los partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación fueron prohibidos, y se estableció una censura que impedía cualquier discusión sobre el terrorismo estatal y sus víctimas. Los artistas e intelectuales fueron sometidos a vigilancia constante, dejando solo la voz del Estado como la única permitida.

El discurso oficial retomó dos temas tradicionales en la cultura política argentina: la creación de un adversario sin rostro ni voz, que debía ser exterminado, y la promoción de un orden basado en la violencia y la autoridad en lugar de la justicia y la democracia.

La sociedad se vio afectada por esta represión y la cultura del miedo se apoderó de ella. Muchos aceptaron el discurso estatal y justificaron la represión con argumentos como "por algo será". Otros optaron por la ignorancia deliberada de los acontecimientos a pesar de que ocurrían a la vista de todos. Lo más inquietante fue la internalización de la acción estatal por parte de la sociedad, lo que se tradujo en autocensura, control mutuo y

vigilancia de vecinos. Esta autovigilancia reveló cuán profundamente arraigado estaba el autoritarismo, alimentado por el discurso estatal.

## La economía imaginaria: inflación y especulación

Durante la presidencia de *Videla* en Argentina, el ministro de Economía, *José Alfredo Martínez de Hoz*, se enfrentó a una crisis económica agravada por la crisis política y social, así como por la presión de las organizaciones armadas. Inicialmente, la represión brutal y una política anticrisis tradicional permitieron superar la situación.

Sin embargo, los militares y los sectores empresariales decidieron emprender una transformación económica a largo plazo. Consideraron que la inestabilidad política y social se debía a la falta de control sobre los grandes grupos corporativos, tanto trabajadores como empresarios. Para cambiar esta dinámica, el ministro *Martínez de Hoz* se centró en un conjunto de grupos empresariales que aceptaron los beneficios estatales y redujeron la lucha corporativa. Esta transformación requirió una fuerte intervención estatal para reprimir y desarticular a los actores corporativos, imponer reglas que favorecieran a los ganadores y redistribuir los recursos de la sociedad hacia ellos.

La relación entre el ministro de Economía y los militares fue complicada debido a sus divisiones internas y a la necesidad de encontrar puntos de acuerdo. Fue una relación de poder a poder y, a veces, conflictiva.

Las medidas iniciales, como la intervención de la CGT, la supresión de negociaciones colectivas y la prohibición de huelgas, llevaron al congelamiento de salarios. A partir de mediados de 1977, se implementaron reformas más significativas, como la reforma financiera que eliminó la regulación estatal de las tasas de interés y permitió la proliferación de bancos e instituciones financieras. Sin embargo, esto llevó a tasas de interés altas y una inflación persistente.

En diciembre de 1978, se introdujo la "pauta cambiaria" para reducir la inflación mediante la devaluación planificada del peso. Sin embargo, esto resultó en una revaluación del peso frente al dólar y una inundación de productos importados que perjudicó a la industria local.

La economía real sufrió mientras el sector financiero obtuvo enormes beneficios. El endeudamiento externo financió el déficit estatal y las obras públicas, mientras que la especulación financiera se disparó. La economía productiva no podía competir con la especulación, lo que llevó a una crisis financiera en 1980 y la quiebra de varios bancos importantes.

El gobierno tuvo que abandonar la paridad cambiaria y la "plata dulce" llegó a su fin, dejando a la sociedad con las pérdidas económicas.

## Achicar el Estado y silenciar a la sociedad

El ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, abogaba por una reducción de las funciones del Estado y su conversión en un ente "subsidiario". Sin embargo, esta propuesta generó resistencia en algunas facciones de las Fuerzas Armadas, ya que había militares con tendencias nacionalistas y dirigistas, así como otros que deseaban mantener y beneficiarse

de las empresas públicas y proyectos estatales. Esta tensión dentro del gobierno militar resultó en políticas económicas ambiguas y contradictorias, que no siempre estaban alineadas con los principios declarados por Martínez de Hoz.

La "privatización periférica" realizada sin control ni regulación provocó el crecimiento de competidores privados a expensas de empresas estatales de servicios que se endeudaron y deterioraron. Paralelamente, el Estado asumió la responsabilidad de numerosas empresas y bancos en quiebra debido a esta política económica. Este proceso, paradójicamente, no logró reducir el tamaño del Estado, ya que el gasto público aumentó de forma sostenida, inicialmente financiado con emisión y luego con endeudamiento externo. Parte de estos fondos fueron destinados a las Fuerzas Armadas, que se equiparon en previsión de conflictos con Chile y posteriormente con Gran Bretaña por las Malvinas. Las Fuerzas Armadas, a su vez, se involucraron en la administración y ejecución de obras públicas, generando una dispersión de recursos y dificultades para seguir un presupuesto claro debido a la alta inflación.

En el ámbito político, a pesar de la fuerte tradición presidencialista en Argentina, durante este período el poder real estaba disperso y sujeto a constante escrutinio y limitación por parte de los líderes de las tres fuerzas armadas. Aunque el Estatuto del Proceso y las actas institucionales crearon la Junta Militar con poderes para designar al presidente y controlar sus acciones, las atribuciones entre ambos no estaban claramente definidas y fluctuaban según el equilibrio de poder en cada momento. Además, se estableció la Comisión de Asesoramiento Legislativo para discutir leyes, compuesta por representantes de cada rama militar que seguían órdenes de sus superiores. La actividad política estaba prohibida, el Congreso fue suprimido y se depuró la Justicia. Este período estuvo marcado por una distribución opaca y cambiante del poder político.

Durante este período, la estructura legal y normativa del país se vio gravemente afectada, con un Estado en gran medida controlado por el terrorismo clandestino. La corrupción se extendió en la administración pública, y los principios normativos y legales que solían establecer límites al ejercicio del poder fueron ignorados en gran medida. Hubo una pérdida significativa de calidad en la administración pública, ya que se excluyó a profesionales competentes y se permitió que la arbitrariedad se arraigara en las acciones de los funcionarios. La falta de controles y la presencia de un Estado clandestino contribuyeron a esta situación, erosionando la estructura legal y ética de la república.

En resumen, la Reorganización no se limitó a eliminar los mecanismos democráticos constitucionales o a alterar profundamente las instituciones republicanas, como habían hecho los regímenes militares anteriores. Fue una verdadera revolución desde adentro contra el Estado, socavando las capacidades incluso para ejercer funciones básicas de regulación y control. Se trató de un quiebre profundo en la estructura y funcionamiento del Estado, debilitando su capacidad de operar dentro de los límites legales y constitucionales que solían guiar su actuación.

La fragmentación del poder y las tendencias centrífugas generaron una anarquía en la que no existía una instancia superior a las tres fuerzas militares para dirimir conflictos. Los

generales Videla y Viola encabezaron la facción más fuerte, respaldando a Hoz pero reconociendo la necesidad de una salida política en el futuro. Otro grupo abogaba por una dictadura a largo plazo y represión continua. La Marina, bajo el mando de Emilio Massera, buscaba una salida política que lo llevara al poder, empleando estrategias como utilizar eventos populares como el Campeonato Mundial de Fútbol y el conflicto con Chile para ganar adhesión. Hubo una falta de unidad y visión común dentro del gobierno militar.

El grupo liderado por Videla y Viola gradualmente consolidó su control sobre el poder. Sin embargo, en mayo de 1978, Massera obtuvo una victoria al lograr la separación de las funciones de presidente de la Nación y comandante en jefe del Ejército. En 1980, Videla logró imponer en la Junta de Comandantes la designación de Viola como su sucesor, aunque esta decisión fue resultado de una compleja negociación que anticipó los desafíos que enfrentaría Viola durante su presidencia. La lucha y las tensiones internas dentro del régimen militar eran evidentes.

Durante cinco años, a pesar de la falta de un orden claro, el gobierno militar logró mantener una paz relativa en la sociedad. La represión y el temor desempeñaron un papel importante en esta estabilidad, junto con la disposición de gran parte de la población a tolerar un gobierno que al menos garantizaba cierto orden mínimo. Sin embargo, hacia el final del período de Videla, el descontento provocado por la crisis económica y las divisiones internas en el gobierno militar comenzaron a generar protestas limitadas y confusas.

Empresarios afectados por la crisis y sindicalistas que habían sido silenciados por el gobierno empezaron a unirse al frente opositor. Los sindicalistas se dividieron en dos tendencias: los dialoguistas y los combativos. En 1979, los combativos organizaron un paro general de protesta que resultó en la prisión de la mayoría de los dirigentes. A finales de 1980, reconstituyeron la CGT y eligieron a Saúl Ubaldini como secretario general. En 1981, la CGT realizó una nueva huelga general y hacia finales de ese año, una marcha obrera hacia la iglesia de San Cayetano exigiendo "pan, paz y trabajo". Estas protestas se unieron a las quejas de estudiantes y algunos grupos empresariales regionales.

La Iglesia también comenzó a cambiar su postura a medida que el régimen militar mostraba signos de debilidad. Al principio, tuvo una actitud complaciente y estableció una estrecha asociación con la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, con el tiempo, la Iglesia comenzó a adoptar una postura más crítica y se alineó con los crecientes reclamos de la sociedad, especialmente influenciada por la orientación del nuevo papa Juan Pablo II. En 1979, el Arzobispado de Buenos Aires impulsó la Pastoral Social para reconstruir el vínculo entre la Iglesia y los trabajadores. El documento "Iglesia y comunidad nacional" de 1981 afirmó los principios republicanos y expresó la oposición de la Iglesia al régimen militar, estableciendo vínculos con los crecientes reclamos de la sociedad.

En medio de la brutal represión, un grupo valiente de madres de desaparecidos comenzó a reunirse semanalmente en la Plaza de Mayo. Con la cabeza cubierta por pañuelos blancos, estas madres exigían la aparición de sus hijos. Su acción testimonial y ética desafiaba directamente el discurso represivo y comenzaba a conmover la indiferencia de la sociedad. Este grupo, conocido como las Madres de Plaza de Mayo, se convirtió gradualmente en la

voz de un movimiento más amplio de organizaciones defensoras de los derechos humanos, generando un debate público fortalecido por la prensa, gobiernos y organizaciones internacionales.

A partir de finales de 1981, los militares se vieron obligados a dar alguna respuesta frente a la presión. Aunque en general querían cerrar la cuestión, surgieron diferencias y contradicciones entre ellos, intensificando las tensiones preexistentes y ampliando la brecha por la cual la opinión pública comenzaba a resurgir. Este marcó un momento clave en la resistencia y la lucha por los derechos humanos en Argentina.

Este cambio en el clima político comenzó a revitalizar a los partidos políticos. Desde 1976 hasta 1981, se impuso una prohibición que congeló la actividad partidaria. Sin embargo, en 1981, esta prohibición fue levantada. Los grupos de derecha dispersos fueron convocados por el gobierno para formar una fuerza política oficialista en un intento de apertura política. Paralelamente, los partidos peronistas y radicales iniciaron conversaciones con otros partidos menores, lo que llevó a la formación de la Multipartidaria.

Aunque la Multipartidaria no tenía una gran vitalidad, los partidos políticos comenzaron a elevar su tono y a reclamar la legitimidad política exclusiva. No estaban dispuestos a colaborar con el gobierno en una salida electoral condicionada ni a aceptar una democracia bajo tutela militar. Este acuerdo representaba un mínimo consenso. Además, los partidos políticos empezaron a incorporar las voces de empresarios, sindicalistas y defensores de derechos humanos, junto con las otras voces (estudiantes, religiosos, intelectuales). Junto con estas voces, formaron un coro que, a principios de 1982, era difícil de ignorar. Este período marcó el resurgimiento de la actividad política y sentó las bases para futuros desarrollos democráticos en Argentina.

### guerra de Malvinas

A partir de 1980, los líderes del Proceso estaban inmersos en debates sobre la salida política. Estaban preocupados por la crisis económica, el aislamiento internacional y, sobre todo, las divisiones internas que dificultaban la búsqueda de acuerdos para una salida viable. Estas discrepancias se hicieron públicas con la designación de Viola, que fue objeto de oposición por parte de la Marina. Las tensiones se agravaron durante el prolongado período previo a su asunción en marzo de 1981 y se intensificaron cuando quedó claro que Viola tenía la intención de cambiar el rumbo de la política económica.

Viola intentó aliviar la situación de los empresarios locales afectados por la crisis financiera y la devaluación de la moneda, además de buscar concentrar la política económica al incorporarlos al gabinete. Estableció contacto con varios políticos para discutir posibles alternativas para una transición futura, aunque no logró obtener un apoyo sólido ni mitigar la crisis económica. Diferentes facciones militares lo acusaban de falta de firmeza en su liderazgo. Estos desafíos internos marcaban un momento crucial en el declive del régimen militar en Argentina y preludiaban cambios significativos en la política y la sociedad del país.

A finales de 1981, la enfermedad de Viola abrió la oportunidad para su reemplazo por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien mantuvo su posición como comandante en jefe del Ejército. Galtieri se presentó como el líder vigoroso capaz de llevar al Proceso a un

final triunfante. Manifestó su disposición a alinear al país con Estados Unidos y a respaldar la guerra encubierta que este libraba en América Central. Argentina contribuyó en ese momento con asesores y armamento, y a cambio, obtuvo el levantamiento de las sanciones que la administración de Carter había impuesto al país por violaciones a los derechos humanos.

En el aspecto económico, su ministro de Economía, Roberto Alemann, retomó las prioridades iniciales defendiendo "la desinflación, la desregulación y la desestatización". Sin embargo, esto profundizó la recesión y generó protestas tanto de sindicatos como de empresarios. A largo plazo, Galtieri anunció un plan de privatizaciones, que encontró oposición incluso dentro de su propio gobierno. El ímpetu de Galtieri se encontró rápidamente con resistencias crecientes, movilizaciones callejeras y protestas cada vez más enérgicas.

Fue en este contexto que se concibió y ejecutó el plan de ocupar las Islas Malvinas, que parecía ser la solución a muchos de los problemas del gobierno militar. Argentina había estado reclamando las Malvinas a Gran Bretaña desde su ocupación en 1833. En 1965, las Naciones Unidas instaron a ambos países a negociar sus diferencias. Sin embargo, los británicos hicieron poco para avanzar en ese sentido, mientras que el gobierno argentino se acercó a los habitantes de las islas proporcionándoles diversos servicios educativos y de salud. Desde la perspectiva de los militares, una acción militar para lo que llamaban "recuperar las islas" les permitiría unificar a las Fuerzas Armadas detrás de un objetivo común y, de un solo golpe, obtener legitimidad ante una sociedad claramente descontenta.

Además, una acción militar ofrecería una ventaja adicional: resolver el estancamiento causado por la disputa con Chile sobre el canal del Beagle. En 1971, los presidentes Lanusse y Allende acordaron someter a arbitraje la cuestión de la posesión de tres islotes que dominan el paso por ese canal, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. En 1977, el laudo arbitral concedió estos islotes a Chile, lo cual el gobierno argentino rechazó. En 1978, ambos países estaban dispuestos a resolver la cuestión por la fuerza cuando decidieron aceptar la mediación del Papa. A finales de 1980, el Vaticano presentó su propuesta, que básicamente mantenía lo establecido en el laudo, y el gobierno argentino optó por dilatar su respuesta y retomar una postura hostil activa hacia Chile.

Diversas fantasías profundamente arraigadas en el imaginario social se sumaron a la nueva fantasía de "ingresar al Primer Mundo" a través de una política exterior "fuerte". Estas incluían la idea de la "patria grande" y los "despojos" de los que Argentina había sido víctima históricamente. Todo esto se combinó con el mesianismo militar tradicional y la ingenuidad de sus estrategias, que carecían de un entendimiento sólido de la política internacional. La agresión inicialmente dirigida hacia Chile, pero bloqueada por la mediación papal, fue luego redirigida hacia Gran Bretaña.

Desde 1977, la Marina había planteado la propuesta de ocupar las islas, pero fue vetada por Videla y Viola. Galtieri retomó esta idea una vez que asumió la presidencia. Se contaba con el apoyo de Estados Unidos y se esperaba una reacción poco enérgica de Gran Bretaña, que finalmente admitiría la ocupación a cambio de concesiones y compensaciones. En ninguna de las hipótesis se consideraba la posibilidad de una guerra.



El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas argentinas llevaron a cabo un desembarco exitoso y ocuparon las Malvinas, venciendo la débil resistencia de las escasas tropas británicas presentes. Este hecho generó un amplio apoyo popular, con la gente congregándose espontáneamente en la Plaza de Mayo. Los dirigentes políticos viajaron junto a los jefes militares para participar en la asunción del nuevo gobernador militar de las islas, el general Mario Benjamín Menéndez, y la imposición del nuevo nombre "Puerto Argentino" a su capital, antes llamada "Puerto Stanley". El gobierno militar había logrado una victoria política al identificarse con una reivindicación profundamente arraigada en la sociedad, alimentada por una tradición nacionalista y antiimperialista.

La sociedad, que previamente había celebrado el triunfo argentino en el Campeonato Mundial de Fútbol, ahora se regocijaba por haber ganado esta batalla y estaba dispuesta a avanzar, si fuera necesario, hacia una guerra. Si los militares triunfaban, habrían saldado sus deudas con la sociedad, al costo de conceder cierta libertad para que se expresaran voces no regimentadas.

La reacción en Gran Bretaña fue sorprendentemente firme, liderada por la primera ministra Margaret Thatcher, quien buscó obtener beneficios políticos de esta victoria militar. Rápidamente se organizó una fuerza naval considerable, incluyendo dos portaaviones. Gran Bretaña obtuvo el apoyo de la Comunidad Europea y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que calificó a Argentina como nación agresora y exigió la retirada de las tropas argentinas de las Malvinas. Aunque Argentina recibió apoyo declarativo de América Latina (excepto Chile, que colaboró con los británicos), tenía poco peso militar en términos de respaldo.

A pesar de la falta de apoyo consistente y el desconocimiento de las reglas internacionales, el gobierno militar argentino decidió enfrentarse a las potencias del Primer Mundo. Suponían que, después del hecho consumado, la cuestión se resolvería a través de negociaciones, pero la reacción británica fue inesperadamente firme. Argentina estuvo dispuesta a aceptar diversas condiciones, siempre que Gran Bretaña reconociera la soberanía argentina sobre las islas, una condición inaceptable para los británicos. Los gobernantes argentinos quedaron atrapados en la movilización patriótica que habían desencadenado, y los más prudentes tuvieron que ceder ante las voces más exaltadas.

El gobierno argentino se encontró cada vez más aislado diplomáticamente, agravado por los antiguos reclamos de violaciones a los derechos humanos. En el exterior, se argumentó que un triunfo argentino legitimaría todo su desempeño anterior. Estados Unidos mantuvo su respaldo a Argentina, pero de una manera amplia y general, sin un compromiso militar directo. Después de un mes intentando persuadir a la Junta Militar argentina para llegar a un acuerdo, Estados Unidos abandonó su mediación. El Senado estadounidense votó sanciones económicas contra Argentina y ofreció apoyo a Gran Bretaña.

A finales de abril, las Fuerzas de Tareas británicas, que habían llegado a la zona de las Malvinas, recuperaron las islas Georgias. El 1 de mayo comenzaron los ataques aéreos a las Malvinas y, al día siguiente, un submarino británico hundió el crucero argentino General Belgrano, que estaba lejos de la línea de batalla. Esto llevó a que la flota argentina se retirara definitivamente del frente de guerra. Luego continuó un largo combate aéreo y naval, en el cual la aviación argentina causó importantes daños a la flota británica, pero no

pudo evitar que las islas quedaran aisladas del territorio continental. Escasos de abastecimientos, sin equipos ni medios de movilidad, y sobre todo sin planes claros, las tropas argentinas solo podían resistir.

En Buenos Aires, se imaginaba una resistencia heroica y se esperaba algún cambio en el mundo. En las islas, sin embargo, sometidas a un demoledor ataque de artillería y aviones, las dudas fueron convirtiéndose en desmoralización. Este cambio se reflejó también en las opiniones públicas, que, aunque manipuladas por la información oficial, empezaron a cuestionar la realidad de la situación. A medida que se cuestionaba la conducción de la guerra, comenzaron a surgir voces críticas en la CGT y dentro del radicalismo. Raúl Alfonsín, líder de la oposición radical, propuso la constitución de un gobierno civil de transición encabezado por el ex presidente Illia. Mientras tanto, los militares seguían aferrándose a la convicción de que solo la victoria sería una salida válida.

El 10 de junio, Galtieri se dirigió por última vez a la gente reunida en la Plaza de Mayo y dos días después llegó el papa Juan Pablo II. Luego, comenzó el ataque final a Puerto Argentino, donde se habían atrincherado la mayoría de las tropas. La desbandada fue rápida y la rendición, prácticamente incondicional, se produjo el 14 de junio, 74 días después del inicio del conflicto. El conflicto dejó más de 700 muertos o desaparecidos y casi 1300 heridos. Al día siguiente de la rendición, los generales exigieron la renuncia de Galtieri.

### La vuelta de la democracia

La derrota en la guerra de las Malvinas agravó la crisis del régimen militar y expuso los conflictos que estaban latentes. La responsabilidad de la derrota recayó en la Junta Militar, cuyos miembros fueron enjuiciados y condenados posteriormente. En este contexto, el general Reynaldo Bignone fue designado presidente, logrando un consenso mínimo de las fuerzas políticas para un programa de institucionalización, aunque sin plazos precisos.

El nuevo gobierno se propuso negociar una salida electoral y asegurar una retirada ordenada. Intentaron obtener el acuerdo de los partidos políticos en diversas cuestiones, incluyendo la política económica, la presencia institucional de las Fuerzas Armadas en el nuevo gobierno y garantías de que no se investigarían actos de corrupción ni responsabilidades en lo que se llamaba la "guerra sucia". Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la opinión pública y los partidos políticos, quienes convocaron a una marcha civil en defensa de la democracia, con una asistencia masiva. Como resultado de esta presión, el gobierno fijó la fecha de las elecciones para finales de 1983.

A pesar de esto, el gobierno continuó intentando cerrar el debate sobre el pasado reciente. Emitieron un documento sobre los desaparecidos declarando que no había sobrevivientes y que todos habían caído combatiendo. Además, se promulgó una ley que estableció una autoamnistía para los militares, eximiéndolos de cualquier eventual acusación. Estas acciones reflejaban la resistencia de ciertos sectores del régimen militar a enfrentar su pasado y a asumir responsabilidades.

Con la disminución de la represión, surgieron nuevos actores sociales en Argentina. Este nuevo activismo se manifestó en diversos ámbitos de la sociedad. En las universidades, en grupos de parroquias, en conciertos de rock nacional (que también tenían una dimensión

política), en fábricas y en otros lugares, comenzaron a surgir movimientos y manifestaciones sociales.

A diferencia de la época anterior, a finales de los años sesenta, no solo se rechazaba la violencia y cualquier forma de guerra, sino que también había una menor confianza en la posibilidad de encontrar una solución única, radical y definitiva. Este cambio de actitud fue impulsado en parte por la movilización sindical, que fue muy activa. Los sindicatos llevaron a la gente a las calles para protestar contra la crisis económica y en favor de la democracia. Durante 1982 y 1983, se llevaron a cabo una serie de paros generales y numerosas huelgas parciales, con una destacada participación de los gremios estatales.

Luego de las fuertes sacudidas de la crisis económica y la derrota militar, la democracia se percibía como la clave para superar desencuentros y frustraciones. Se veía como una fórmula para la convivencia política y también como la solución a los problemas concretos. La afiliación a los partidos políticos fue masiva después de que se levantara la prohibición, con uno de cada tres electores perteneciendo a algún partido. Hubo un gran deseo de participación y se animaron los comités y unidades básicas.

El peronismo experimentó notables transformaciones. A pesar de su histórica tensión con la democracia, comenzó a transformarse en un partido aceptable. Por otro lado, el radicalismo se renovó bajo el liderazgo de Raúl Alfonsín. Durante el régimen militar, Alfonsín se destacó al criticar enérgicamente a los militares, defender a los detenidos políticos y reclamar por los desaparecidos. Desde el fin de la guerra de Malvinas, su ascenso fue rápido y logró derrotar a los herederos de Balbín en el partido radical. Hizo de la democracia su bandera y combinó esto con propuestas de modernización de la sociedad y el Estado.

Tanto los radicales como los peronistas obtuvieron amplios apoyos y dejaron poco espacio para otros partidos. La derecha tuvo dificultades para unificarse. Las organizaciones de derechos humanos se volvieron más intransigentes en su demanda de la aparición con vida y el juicio a los responsables, una demanda que los partidos políticos intentaban traducir en términos aceptables para la política. También hubo desafíos para articular los intereses sociales más estructurados, como los sindicatos y los empresarios, que preferían canalizar sus demandas por los canales corporativos tradicionales.

Esta combinación de valoración de la civilidad con un fuerte voluntarismo llevó a una suerte de "democracia ingenua", aséptica y conformista. La civilidad experimentó su ilusión plenamente y respaldó al candidato que mejor captó este estado colectivo. Raúl Alfonsín basó su campaña en la Constitución y en una apelación a la transformación de la sociedad hacia un enfoque moderno, laico, justo y colaborativo. Estigmatizó al régimen militar, prometió justicia para los responsables y denunció un pacto de impunidad entre militares y sindicalistas. Logró persuadir a la mayoría de la sociedad, y el radicalismo, con más de la mitad de los votos, superó al peronismo en una elección nacional por primera vez en su historia.



## 1983-1989 “Capítulo VIII”

- ❖ Ilusión democrática.
- ❖ Corporación militar y sindical.
- ❖ Plan Austral.
- ❖ Apelación a la civilidad.
- ❖ Fin de la ilusión.

### La ilusión democrática

Raúl Alfonsín asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983 en un contexto desafiante. Tras casi ocho años de dictadura militar y con la reciente derrota en la guerra de Malvinas, el país estaba ansioso por el retorno a la democracia y la normalización institucional. La multitud que celebró su asunción reflejaba una victoria para la democracia.

Sin embargo, la situación económica era crítica. Desde 1981, Argentina enfrentaba problemas graves: altos niveles de inflación, una deuda externa creciente con fuertes vencimientos inmediatos y un desbalance en los sectores económicos, con un giro hacia las finanzas y los servicios en detrimento de la producción y la industria.

En este contexto, Alfonsín debía lidiar con múltiples desafíos. La inflación, en particular, estaba descontrolada y afectaba a la calidad de vida de la población. A pesar de la urgencia, en su discurso inicial no se hizo un énfasis significativo en cuestiones económicas. Los reclamos relacionados con derechos humanos y economía eran demandas acumuladas que necesitaban respuesta.

A lo largo de su presidencia, Alfonsín buscó implementar políticas para estabilizar la economía, aunque con resultados limitados debido a la complejidad de la situación económica. Además, enfrentó fuertes tensiones políticas y sociales, incluyendo intentos de golpes militares y crisis laborales.

Raúl Alfonsín asumió la presidencia en un momento de incertidumbre sobre su capacidad para gobernar. Los sectores que estaban vinculados a la dictadura militar o se vieron afectados por su caída, como los militares, la Iglesia, los empresarios y los sindicatos, estaban en una posición defensiva y preocupados por su futuro bajo un gobierno democrático. Mientras tanto, el peronismo enfrentaba una crisis interna después de la derrota electoral y estaba buscando debilitar al radicalismo desde varios frentes.

Aunque el radicalismo liderado por Alfonsín había logrado una fuerte representación en votos, comparada solo con los grandes triunfos de Yrigoyen o Perón, enfrentaba desafíos internos. Tenían mayoría en la Cámara de Diputados, pero habían perdido apoyo en las regiones tradicionales del interior y no controlaban la mayoría del Senado. El liderazgo de Alfonsín en su partido, la Unión Cívica Radical (UCR), era fuerte, pero también había divisiones internas y obstáculos para implementar su agenda. Optó por rodearse de un grupo de asesores, incluyendo intelectuales y técnicos recién incorporados a la política, así como un grupo de jóvenes radicales conocido como la Junta Coordinadora Nacional, para abordar estos desafíos.

Alfonsín basó su fortaleza en la propuesta de construir un Estado de derecho en el que los poderes corporativos debían someterse a reglas y procesos democráticos. Esta idea apuntaba a manejar conflictos de manera pacífica, ordenada, transparente y equitativa, buscando establecer un marco institucional sólido y reafirmar los valores democráticos en Argentina después de años de dictadura militar.

El gobierno de Raúl Alfonsín consideró que, a pesar de los desafíos económicos, la prioridad radicaba en erradicar el autoritarismo y establecer una verdadera representación de la voluntad ciudadana. Se le dio gran importancia a la política cultural y educativa como una manera de contrarrestar la intolerancia que la dictadura militar había arraigado en la sociedad.

En el ámbito educativo, se implementó un programa masivo de alfabetización y se emprendieron esfuerzos para dismantelar las estructuras represivas en el sistema educativo. Se promovió un debate público sobre los contenidos educativos, culminando en un Congreso Pedagógico que buscaba definir la educación que la sociedad deseaba. En el campo de la cultura y los medios de comunicación estatales, se permitió la libertad de expresión, lo que facilitó la diversificación de opiniones y la discusión de temas variados, aunque para algunos esto resultó molesto.

En el ámbito académico y científico, se facilitó el regreso de destacados intelectuales e investigadores que habían emigrado durante el régimen militar. Hubo transformaciones significativas en universidades como la UBA, que se reconstruyeron centrándose en la excelencia académica y el pluralismo. Los intelectuales jugaron un papel activo en la política, asesorando a Alfonsín y contribuyendo a discusiones políticas más enriquecedoras y profundas, marcando una etapa de revitalización en la vida política y cultural del país. Antonio Cafiero, un destacado peronista, también fue parte de este movimiento hacia una discusión política más compleja y abierta.

El período de modernización cultural alcanzó su punto más destacado con la aprobación de leyes que marcaban un quiebre en temas tradicionales. En 1987, se sancionó la ley que permitía el divorcio vincular, un tema considerado tabú en la sociedad. Posteriormente, se aprobó la ley de patria potestad compartida, representando un avance en la modernización de las relaciones familiares, donde Argentina estaba rezagada.

La aprobación de la ley de divorcio generó un intenso debate, enfrentando la resistencia de los sectores más conservadores de la Iglesia católica. A pesar de sus intentos de oponerse y de movilizaciones en las que hasta la Virgen de Luján fue sacada a la calle, fracasaron debido al alto consenso que existía en torno a la nueva norma. Este cambio en las leyes reflejaba una práctica ya establecida en la sociedad.

La Iglesia, que se había definido a favor de la democracia en 1981 aunque no había criticado abiertamente a la junta militar y sus prácticas genocidas, comenzó a manifestar una creciente hostilidad hacia el gobierno radical. En el ámbito cultural, esta disputa se intensificó con los obispos locales, adoptando un discurso beligerante en contra de la democracia, argumentando que representaba los males del siglo, como la droga, el terrorismo, la pornografía y el aborto.

Raúl Alfonsín basó su discurso en valores éticos como democracia, paz, derechos humanos, solidaridad internacional e independencia de los Estados. Estos principios fueron clave para fortalecer las instituciones democráticas en Argentina y su imagen a nivel global. El gobierno se enfrentó a importantes desafíos en política exterior, particularmente con Chile por el conflicto del Beagle y con Gran Bretaña por las Malvinas.

En el caso del Beagle, el laudo papal, aunque rechazado previamente por los militares, fue aceptado como la única solución viable por el gobierno democrático. Se convocó a un referéndum popular que respaldó la opción de una solución pacífica. Respecto a las Malvinas, a pesar de la pérdida militar y el obstáculo de la soberanía, Argentina logró recuperar terreno en el ámbito internacional, buscando respaldo y mediando en conflictos en Centroamérica.

Argentina se asoció con países recién democratizados (Uruguay, Brasil, Perú) y trabajó para aplicar principios éticos y políticos generales. Aprovechó la buena relación con Estados Unidos y su apoyo a la democracia, lo que contribuyó a estabilizar la economía y fortalecer las instituciones democráticas locales, marcando un camino independiente y constructivo en política exterior.

### La corporación militar y la sindical

En el ámbito cultural y en las relaciones exteriores, el gobierno radical logró avances significativos. Sin embargo, enfrentó dificultades al tratar con dos poderosas corporaciones cuyo acuerdo había denunciado durante la campaña electoral: la militar y la sindical. El poder del gobierno demostró ser insuficiente para imponer sus reglas a ambas.

La sociedad, indignada por el fracaso militar en la guerra y después de décadas de ignorar las atrocidades del genocidio, se enfrentó a la cruda realidad a través de denuncias judiciales, medios de comunicación y el impactante informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por Ernesto Sábató y compuesta por personalidades independientes. El informe titulado "Nunca más" reveló la verdad de manera irrefutable, incluso para aquellos que intentaban justificar a los militares. La mayoría de la sociedad los repudió enérgicamente, exigiendo justicia completa y castigo para los responsables.

La derrota en la guerra de Malvinas y el fracaso político evidente, sumados a las divisiones internas y los cuestionamientos propios, debilitaron considerablemente la institución militar. A pesar de esto, los militares mantenían ciertos espacios de poder. Para justificar sus acciones, iniciaron una campaña denominada "guerra sucia" y se enorgullecieron de su supuesta victoria en la "guerra contra la subversión". Ante la condena de la sociedad, intentaron desvincularse y recordaron la complicidad de políticos, empresarios, medios de comunicación y detractores en sus acciones, admitiendo, en el mejor de los casos, solo "excesos".

Durante los años del Proceso, el presidente Alfonsín se destacó como uno de los más firmes defensores de los derechos humanos y utilizó esta causa como una bandera durante su campaña electoral, al mismo tiempo que criticaba enérgicamente a la corporación militar. Aunque compartía la amplia demanda de justicia en la sociedad, también estaba

preocupado por encontrar una manera de someter de forma permanente a las Fuerzas Armadas al poder civil.

Su propuesta incluía algunas distinciones que eran difíciles de aceptar para la sociedad y, en particular, para las organizaciones de derechos humanos. Alfonsín proponía separar el juicio a los culpables de los juicios a la institución militar, que seguía siendo parte del Estado, y establecer límites en estos juicios, diferenciando entre aquellos que dieron órdenes que llevaron a las atrocidades, aquellos que simplemente las cumplieron y aquellos que se excedieron cometiendo crímenes atroces. La idea era concentrar las sanciones en las cúpulas de mando. El gobierno confiaba en que las Fuerzas Armadas mismas respaldarían esta propuesta, ya que era un equilibrio entre las demandas civiles y la postura predominante en los militares, quienes asumieron la crítica a sus propias acciones y procedieron a purgar sus filas, castigando a los máximos responsables.

Para llevar a cabo esta estrategia, se realizaron reformas en el Código de Justicia Militar y se decidió enjuiciar a las tres primeras Juntas Militares, a las que se sumó la cúpula de las organizaciones armadas, incluyendo al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que ya había sido desarticulado y a Montoneros. Sin embargo, surgieron problemas importantes: los militares se negaron a revisar sus acciones y juzgar a sus líderes. A finales de 1984, ante la resistencia en los cuarteles, el presidente trasladó el caso a la Cámara Federal de la Capital. En abril de 1985, en un ambiente cada vez más tenso, comenzó el juicio público a los ex comandantes, que duró hasta finales de año. Aunque el juicio reveló las atrocidades del genocidio, la militancia civil perdió algo de impulso, mientras que las organizaciones defensoras de los derechos humanos intensificaron su lucha. Además, comenzaron a surgir voces que, hasta entonces, habían sido prudentemente silenciadas y que defendieron la acción de los militares y pidieron su amnistía.

A finales de 1985, poco después de que el gobierno ganara las elecciones legislativas, se emitió el fallo de la Cámara Penal que condenó a los ex comandantes, negando la existencia de una guerra que justificara sus acciones, distinguiendo las responsabilidades individuales y decidiendo continuar la acción penal contra otros responsables de las operaciones. Este fallo estableció un precedente crucial al condenar la conducta aberrante de los líderes del Proceso, desacreditando cualquier justificación y sometiendo a los militares a la ley civil. Fue un ejemplo ejemplar y un sólido fundamento para el Estado de derecho que la democracia intentaba establecer. Sin embargo, no puso fin al problema entre la sociedad y la institución militar, sino que lo mantuvo latente.

La Justicia continuó su labor, atendiendo a las numerosas denuncias contra oficiales de diferentes rangos, citándolos y acusándolos. La convulsión interna en las Fuerzas Armadas, especialmente en el Ejército, tuvo un nuevo enfoque: ya no se trataba solo de la situación de los citados por los jueces, que eran oficiales en actividad y de menor rango y que no se consideraban responsables, sino de los ejecutores de los crímenes imputados. Por otro lado, el gobierno comenzó un prolongado y agotador intento de limitar y restringir la acción judicial para contener el clima febril en los cuarteles, que representaba una amenaza de alzamiento militar.

En Semana Santa de 1987, un grupo de oficiales liderado por el teniente coronel Aldo Rico se amotinó en Campo de Mayo, exigiendo una solución política a las citaciones judiciales

y una reconsideración de la conducta del Ejército. Aunque no cuestionaron el orden constitucional, buscaban que el gobierno resolviera el problema de ciertos oficiales. Este episodio condujo a la promulgación de leyes conocidas como la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida. La primera, presentada por la UCR y sancionada a fines de 1985, establecía un límite temporal de dos meses para las citaciones judiciales, tras el cual no habría nuevas citaciones. Sin embargo, generó controversia al instituir la impunidad para los militares responsables de desapariciones forzadas y otros crímenes durante la dictadura. En respuesta, decenas de miles de personas se manifestaron en Buenos Aires en protesta contra la ley. Aunque se esperaba que estas leyes aliviaran la situación, resultaron contraproducentes al generar una oleada de citaciones y juicios que exacerbó el problema en lugar de solucionarlo.

Durante este fin de semana crucial de abril, Alfonsín negoció con los militares para otorgarles mayor impunidad y evitar la radicalización de las masivas protestas que rodearon Campo de Mayo, la Plaza de Mayo y el Congreso. La sociedad, que no respaldaba a los militares responsables de la derrota en Malvinas y de lo que consideraban una "entrega" del país, reaccionó de manera unida y masiva. Todos los partidos políticos y organizaciones se unieron en apoyo al orden institucional, firmando un Acta de Compromiso Democrático. La respuesta masiva y rápida logró evitar el posible apoyo civil a los amotinados, llenando las plazas del país y manteniendo vigiliyas durante los cuatro días del episodio. Aunque la tensión social fue intensa y permitió detener un ataque directo a la democracia, no logró doblegar a los militares ante la sociedad. A pesar de que el motín tuvo escaso apoyo entre los militares, muchos de ellos compartían en cierta medida las demandas de los "carapintadas", aunque ninguno estuvo dispuesto a usar la fuerza para obligarlos a deponer su actitud, mostrando una actitud ambigua.

Durante esas cuatro tensas jornadas, se llevaron a cabo numerosas negociaciones que no tuvieron éxito hasta que Alfonsín se entrevistó con los amotinados en Campo de Mayo. En resultado de estas negociaciones, se produjo un acuerdo peculiar que llevó a la sustitución del General Héctor Ríos Ereñú como Jefe del Estado Mayor por el General José Dante Caridi, y poco después se envió al Congreso el proyecto de Ley de Obediencia Debida. Esta ley fue aprobada por ambas Cámaras y promulgada el 8 de junio de 1987, generando intensos debates. Este episodio puso en riesgo las instituciones democráticas y modificó el panorama político nacional.

La sociedad experimentó un desencanto generalizado y la ilusión de que no era posible doblegar a los militares se hizo realidad. Prevaleció la percepción de una democracia débil, alimentada por un gobierno que parecía incapaz de resolver de manera contundente el enfrentamiento con el Ejército.

En este período, el gobierno de Alfonsín enfrentó la tarea de normalizar la situación de los sindicatos, que se encontraba debilitada tras la derrota electoral del peronismo y la intervención militar en su actividad. Se propuso aprovechar esta debilidad relativa para implementar reformas importantes en la organización sindical. El ministro Antonio Mucci diseñó una ley de normalización que incluía el voto secreto, directo y obligatorio, representación de minorías, limitación de reelección y fiscalización estatal de los comicios sindicales. A pesar de ser aprobada en la Cámara de Diputados en marzo de 1984, fue



rechazada por el Senado. El gobierno luego negoció nuevas normas electorales con los sindicatos, logrando normalizar los cuerpos directivos de los sindicatos para mediados de 1985.

Durante este período, la Confederación General del Trabajo (CGT) organizó trece paros generales entre 1984 y 1988. La presión ejercida por la CGT aprovechó las tensiones sociales causadas por la inflación y los ajustes económicos, particularmente en el sector estatal. Aunque la CGT participó en instancias de concertación con el gobierno, mantuvo un estilo confrontativo y de negociación intermitente. El secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini, logró unificar el descontento social y establecer alianzas tácticas con diversos sectores. A pesar de la presión sindical, el gobierno resistió gracias al apoyo de la sociedad y la apertura de espacios para el diálogo.

En 1987, el gobierno llevó a cabo una maniobra audaz al concertar con un grupo importante de sindicatos y nombrar a uno de sus dirigentes como ministro de Trabajo. A cambio de concesiones importantes, como leyes que organizaban la actividad sindical, obtuvo una relativa tregua social y un eventual apoyo político. Sin embargo, tras la victoria del peronismo en las elecciones de septiembre de 1987, los sindicalistas abandonaron el gobierno. A pesar de esto, la nueva legislación consolidó el poder de la corporación sindical, desvaneciendo la ilusión de someterlos a las reglas de la civilidad democrática.

### Plan Austral, inflación y crisis del Estado

La situación económica en Argentina durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue extremadamente difícil y estuvo marcada por una combinación de inflación alta y creciente, un déficit fiscal importante y una deuda externa creciente. Estos problemas económicos eran crónicos y se agravaron a lo largo de la década de 1980.

○Inflación alta y creciente: La inflación era un problema recurrente que se agravó durante este período. La rápida depreciación de la moneda y los precios en constante aumento minaron el poder adquisitivo de los ciudadanos y generaron incertidumbre económica.

○Déficit fiscal y deuda externa: El gobierno enfrentó un desafío considerable en relación con el déficit fiscal y la deuda externa. El déficit fiscal se debía en parte a la necesidad de financiar el gasto público, incluidos los subsidios a diversos sectores de la economía.

○Dependencia del FMI y acuerdos de ajuste: Argentina dependía en gran medida de la asistencia financiera y los acuerdos de ajuste estructural del FMI para manejar su deuda externa y su situación económica. Estos acuerdos a menudo implicaban políticas de ajuste económico que afectaban a la población a través de recortes en el gasto público y reformas estructurales.

○Flujo de capitales y deuda estatizada: El flujo de capitales se había detenido desde 1981, lo que complicaba aún más la situación económica. El Estado había estatizado la deuda privada en dólares en 1982 bajo el gobierno de Domingo Cavallo, lo que aumentó la deuda pública y su dependencia de las refinanciaciones y acuerdos con los acreedores.

○Debate económico y políticas de ajuste: En este contexto, había un intenso debate económico sobre cómo abordar estos problemas. Algunos abogaban por políticas de ajuste

fiscal y monetario para controlar la inflación, mientras que otros defendían políticas más intervencionistas y proteccionistas.

La política económica inicial del gobierno de Raúl Alfonsín, liderada por el ministro de Economía Bernardo Grinspun, se centró en medidas redistributivas clásicas, como la mejora de las remuneraciones de los trabajadores y la provisión de créditos ágiles a los empresarios medianos. Este enfoque tenía como objetivo impulsar el mercado interno y movilizar la capacidad productiva del país. Se incluyeron controles estatales sobre el crédito, el mercado de divisas y los precios.

Además, se implementaron acciones sociales como el Programa Alimentario Nacional (PAN), que buscaba proporcionar las necesidades básicas a los sectores más pobres afectados por la recesión y el desempleo. Estas medidas estaban diseñadas para mejorar la situación de los sectores medios y populares y abordar las demandas de justicia y equidad social que habían sido destacadas durante la campaña electoral.

Sin embargo, esta política económica fue objeto de críticas tanto de empresarios como de sindicalistas. La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó en contra de esta política debido a razones sindicales y políticas. A pesar de algunos acuerdos mínimos, empresarios y sindicalistas coincidieron en hacer fracasar la política de concertación sectorial propuesta por Grinspun y su equipo.

En este contexto, el gobierno de Alfonsín se enfrentó a importantes desafíos económicos y sociales. La inflación era un problema grave que afectaba la distribución del ingreso y generaba conflictos en la sociedad. La incapacidad para controlar el déficit fiscal y la inflación, así como para reactivar el aparato productivo y responder a la demanda de manera efectiva, evidenciaba la inoperancia política del gobierno en estos asuntos cruciales.

En cuanto a la deuda externa, el gobierno intentó negociar con los acreedores y buscar su buena voluntad al argumentar que las jóvenes democracias necesitaban protección. También se planteó la posibilidad de formar un "club de deudores" latinoamericanos para repudiar la deuda de manera conjunta. Sin embargo, estas estrategias no resultaron efectivas para abordar el problema de la deuda externa.

Ante la creciente crisis económica y social, a principios de 1985, con la inflación en riesgo de convertirse en hiperinflación y la insatisfacción de los acreedores externos, Alfonsín reemplazó a su ministro de Economía por Juan Sourrouille, un economista recién incorporado al radicalismo, quien lo acompañaría casi hasta el final de su gobierno. Este cambio buscaba abordar la crisis económica y tratar de encontrar soluciones efectivas para controlar la inflación y estabilizar la economía.

Efectivamente, durante esos meses, la situación en Argentina era altamente volátil y se enfrentaba a diversas amenazas, incluida la posibilidad de un golpe militar. La agitación en las fuerzas armadas era un motivo de gran preocupación, especialmente en las vísperas del inicio del juicio a las Juntas Militares, un evento que significaba un fuerte cuestionamiento al pasado dictatorial y que podría haber generado tensiones en el ámbito militar.

A finales de abril, se reportaron rumores de un supuesto intento de golpe de Estado, lo que generó alarma en la sociedad y llevó a la movilización de la civilidad en la Plaza de Mayo para defender al gobierno democrático. Este contexto de incertidumbre y posible amenaza militar acentuaba aún más la fragilidad de la democracia y la necesidad de mantener la estabilidad política y social en un momento crucial para la consolidación democrática en Argentina.

Ante este panorama, el anuncio de una "economía de guerra" reflejaba la urgencia de abordar la situación económica crítica y estabilizar la economía en medio de la incertidumbre y las tensiones políticas. La situación era compleja y requería acciones decididas para mantener el orden y evitar que se desencadenara una crisis aún más profunda.

El Plan Austral, anunciado el 14 de junio de 1985 por el ministro de Economía Juan Sourrouille, representó un intento drástico de estabilizar la economía argentina, principalmente centrándose en combatir la hiperinflación y restablecer la confianza en la moneda nacional. Para lograr estos objetivos, el plan incluyó una serie de medidas clave:

- Congelamiento de precios y salarios: Se estableció un congelamiento de precios, salarios y tarifas de servicios públicos para frenar la inflación y controlar las expectativas inflacionarias.

- Estabilidad cambiaria: Se regularon los tipos de cambio y las tasas de interés para evitar fluctuaciones bruscas en el valor de la moneda y estabilizar los mercados.

- Control de la emisión monetaria: Se redujo la emisión de dinero para frenar la inflación y mantener un equilibrio fiscal más sólido.

- Cambio de moneda: Se implementó una nueva unidad monetaria llamada "austral" para reemplazar al peso argentino, en un intento de dejar atrás la asociación negativa con la hiperinflación.

El Plan Austral inicialmente tuvo éxito al detener la hiperinflación y estabilizar la economía, generando un período de relativa calma económica. Sin embargo, a largo plazo, el plan enfrentó desafíos debido a la falta de reformas estructurales sustanciales y la reaparición de presiones inflacionarias. A pesar de sus limitaciones, el Plan Austral fue un intento significativo de estabilizar la economía argentina en un momento de grave crisis económica e inflación descontrolada.

Se trataba del “plan de todos”, quizá la más pura de las realizaciones de la ilusión democrática: entre todos, con solidaridad y sin dolor, se podían solucionar los problemas más complejos, aún aquellos que implican choques de intereses más profundos. El gobierno obtuvo su premio en las elecciones parciales de noviembre de 1985: (apenas seis meses después de que el país estuviera al borde del caos) logró un claro éxito electoral que significaba el apoyo general de la civilidad a la política económica.

La eficacia inicial del Plan Austral en la estabilización de la economía argentina fue seguida por un período de inestabilidad y desafíos. Algunos de los factores que contribuyeron a la recaída de la inflación y los problemas económicos incluyeron:

- Factores externos: La caída de los precios mundiales de los cereales afectó negativamente a la economía argentina, ya que redujo los ingresos por las retenciones a las exportaciones y puso en aprietos a los productores rurales.
- Falta de inversiones: A pesar de los beneficios iniciales del plan, no se produjo un aumento significativo de las inversiones empresariales, lo que limitó el crecimiento sostenible de la economía.
- Conflictos sectoriales: Las tensiones entre diferentes sectores, como la Confederación General del Trabajo (CGT) y el gobierno sobre el congelamiento de precios, contribuyeron a la inflación y la inestabilidad económica.
- Fragilidad de la estabilización: El plan logró una estabilización inicial, pero no abordó los problemas estructurales subyacentes de la economía argentina, como la falta de inversión, la dependencia de las exportaciones de commodities y la rigidez de la estructura económica.

En su intento por encontrar soluciones, exploró varios caminos que involucraban la reactivación de la inversión extranjera, el gobierno buscó atraer inversiones extranjeras, especialmente en el sector petrolero, con el objetivo de estimular la economía y generar empleo. Sin embargo, la apertura a la inversión extranjera a menudo enfrenta resistencia y desconfianza en muchos países, incluida Argentina. También lo intentó con reformas fiscales y desregulación económica, pero estos enfoques implican cambios profundos en la estructura fiscal y regulatoria del país, que podrían chocar con intereses establecidos y sus posibles repercusiones en la sociedad. Además, la desregulación puede generar preocupaciones sobre la protección de los derechos laborales y sociales.

El gobierno, al perseguir reformas, experimentó una disminución en su apoyo. Las propuestas reformistas coincidían con las exigencias del FMI y la creciente orientación liberal de los empresarios. En abril de 1987, los militares desafiaron al poder civil sin obtener respaldo de la sociedad, lo que preservó la institucionalidad democrática. Mientras tanto, los sindicalistas fortalecieron su influencia y bloquearon iniciativas de flexibilización laboral, alentados por ciertos empresarios. Aunque estos últimos obtuvieron ventajas, como participación en la explotación de reservas de YPF, no respaldaron otras reformas como la privatización de empresas públicas.

Tras la derrota electoral en septiembre de 1987, el gobierno perdió fuerza rápidamente. El peronismo, con miras a las elecciones presidenciales de 1989, se negó a apoyar reformas con desgaste social. La reconciliación de Alfonsín con las corporaciones contribuyó al deterioro de la imagen gubernamental, sin lograr mejoras económicas, lo que generó una creciente inestabilidad y percepción de falta de gobernabilidad.

### Apelación a la civilidad

El gobierno radical inicialmente contó con el apoyo de las grandes corporaciones, pero este respaldo era limitado y debía apoyarse en su poder institucional. Sin embargo, en el Congreso, la mayoría de los radicales en la Cámara de Diputados se contrarrestaba con la mayoría relativa de los peronistas en el Senado, lo que dificultaba la toma de decisiones y la implementación de políticas. Esta situación debilitó el respaldo del gobierno para abordar la crisis. Los principales apoyos del gobierno provenían del radicalismo y de la civilidad que lo había respaldado. Aunque la civilidad era un actor político poderoso, era

complejo y fragmentado, lo que dificultaba la unificación de intereses y posturas en el partido radical.

Desde su llegada al poder en 1983, Raúl Alfonsín estableció un fuerte liderazgo al capitalizar el apoyo de la civilidad. Encabezó su agrupación interna, el Movimiento de Renovación y Cambio, que fundó en 1972 en competencia con Ricardo Balbín. Durante su mandato, Alfonsín contó con el respaldo de una notable generación de dirigentes jóvenes, muchos de los cuales provenían de la militancia universitaria y se agrupaban en la Junta Coordinadora Nacional, conocida como la "Coordinadora". Este grupo, con raíces en las tradiciones socialistas y antiimperialistas, aportó cuadros tanto para la lucha partidaria como para la administración del país. Sin embargo, surgieron disidencias dentro del partido debido a su pragmatismo para tejer alianzas.

El pacto entre Alfonsín y la civilidad se consolidó durante la campaña electoral de 1983, caracterizada por actos masivos y una fe común en la democracia como solución a los problemas. Alfonsín aprovechó esta movilización para abordar asuntos cruciales, como la cuestión del Beagle, y trabajó en la educación política de la civilidad para convertirla en un actor político maduro y consciente. Este enfoque de movilización callejera, con reminiscencias al estilo político peronista, se centró en temas y metas importantes.

Durante la primera etapa de su gobierno, Raúl Alfonsín se centró en la lucha contra el autoritarismo y la democratización. Sin embargo, después del Plan Austral y especialmente tras la victoria electoral en noviembre de 1985, su discurso evolucionó hacia el pacto democrático, la participación y la concertación, así como la modernización. Propuso varias reformas concretas, como la reforma del Estado y la posibilidad de trasladar la capital al sur, aunque no se llevaron a cabo. A pesar de mantener la iniciativa en la discusión pública, su poder se basaba en una civilidad frágil, con limitaciones en la coherencia del pacto inicial y tensiones con varios actores sociales, incluidas las fuerzas armadas, la iglesia y el sector corporativo.

Durante este período, varias fuerzas políticas emergieron como respuesta al contexto político y económico en Argentina:

- Partido Intransigente (PI) y la Izquierda: Un grupo de fuerzas de izquierda se unió bajo el Partido Intransigente (PI), compartiendo elementos de la agenda del alfonsinismo, como la defensa de los derechos humanos y la democracia. Sin embargo, el PI añadió consignas nacionalistas y antiimperialistas, especialmente relacionadas con la deuda externa y la crítica al FMI.
- Unión del Centro Democrático (uceDé): Encabezada por Álvaro Alsogaray, la uceDé defendía ideas liberales que eran opuestas al estado de bienestar influenciado por la crisis soviética. Aunque no logró extenderse más allá de la Capital, pudo aspirar a convertirse en la tercera fuerza política, actuando como árbitro entre radicales y peronistas.
- Herminio Iglesias y la Oposición Peronista: Herminio Iglesias, un combativo dirigente peronista, inicialmente intentó oponerse al radicalismo, pero su enfoque polarizante y controvertido provocó una derrota electoral en 1983 y su declive político. En contraposición, surgió una corriente renovada del peronismo liderada por figuras como Antonio Cafiero y Carlos Menem, que optaron por respaldar la

institucionalidad democrática y colaborar con el gobierno radical en cuestiones cruciales.

### Fin de la ilusión

El año 1987 marcó un punto crucial en el gobierno de Alfonsín. El episodio de Semana Santa representó la culminación de la participación activa de la civilidad y al mismo tiempo reveló sus limitaciones para enfrentar a los militares. En medio de un deterioro económico y una inflación creciente, las elecciones de septiembre de 1987 resultaron en una victoria importante para el Partido Justicialista (PJ). El radicalismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y el control de la mayoría de las gobernaciones, excepto en Córdoba y Río Negro, además de la Capital Federal, donde obtuvo victorias.

Tras la derrota electoral de 1987, el gobierno de Alfonsín enfrentó una fuerte crisis que cuestionaba su legitimidad y habilidad para gobernar. Las dificultades se acentuaron hasta su salida del cargo en julio de 1989. A pesar de un respiro momentáneo con el Plan Austral, no logró el respaldo necesario para implementar transformaciones clave, como la privatización de empresas estatales. La persistente inflación y la incapacidad para manejar la deuda externa fueron signos evidentes de la crisis. Además, dentro de su propio partido, surgieron voces en contra de Alfonsín, proponiendo a Eduardo Angeloz, gobernador de Córdoba, como candidato presidencial para 1989, quien tenía un enfoque más tradicional y menos identificado con las tendencias de su gobierno.

La cuestión militar siguió siendo un problema para el gobierno en 1988, evidenciado por dos nuevos episodios de sublevación. En enero, el teniente coronel Aldo Rico, líder del alzamiento anterior, escapó de su prisión y se sublevó nuevamente en un regimiento en el nordeste del país. Sin embargo, esta vez la movilización civil y el respaldo militar fueron mínimos, y Rico fue perseguido y capturado por el Ejército.

A finales de 1988, se produjo otra sublevación liderada por el coronel Mohamed Alí Seineldín, también veterano de la Guerra de las Malvinas y considerado como uno de los principales líderes de los "carapintadas". Seineldín exigió amnistía y cambios en las cúpulas militares. El Ejército se negó a reprimir y compartió algunas de sus demandas. A pesar de que los amotinados terminaron en prisión, estos episodios reflejaron la persistente división y malestar dentro de las Fuerzas Armadas, y dejaron claro que el intento de reconciliación entre la sociedad y las FFAA había fracasado.

En enero de 1989, el grupo terrorista autodenominado Movimiento Todos por la Patria (MTP), liderado por Enrique Gorriarán Merlo, llevó a cabo un asalto al cuartel de La Tablada en el Gran Buenos Aires. A pesar de ser un grupo pequeño, mal equipado y aislado, el Ejército aprovechó esta situación para demostrar su fuerza, resultando en un enfrentamiento en el que fueron aniquilados los asaltantes. En total, murieron 32 guerrilleros, 9 militares y 2 policías. Cuatro guerrilleros fueron detenidos-desaparecidos por las fuerzas gubernamentales, cuyo destino nunca fue revelado por el Estado argentino.

Este evento marcó un cambio en las prioridades y valores de la opinión pública, anticipando la reivindicación de los militares y el olvido de los crímenes de la "guerra sucia". Posteriormente, el gobierno de Menem amnistiaría a los jefes militares condenados.

Luego de las elecciones de septiembre de 1987, Antonio Cafiero, gobernador de Buenos Aires y presidente del Partido Justicialista, se perfilaba como probable sucesor de Alfonsín. Cafiero abogaba por el respeto a la institucionalidad republicana, combinado con un movimiento persistente, propuestas modernas y democráticas, así como el distanciamiento de las grandes corporaciones y la búsqueda de acuerdos mínimos con el gobierno para asegurar una transición ordenada entre presidencias.

Por otro lado, Carlos Menem, gobernador de La Rioja y también parte del movimiento renovador peronista, presentaba un estilo político más tradicional. A pesar de su posición más tradicionalista, Menem logró unificar a diferentes segmentos del peronismo, desde dirigentes sindicales hasta antiguos militantes de diversas tendencias ideológicas, así como caudillos y dirigentes locales desplazados por los renovadores. Su habilidad para conectar con diversos sectores le permitió ganar la elección interna del peronismo en julio de 1988 y ser consagrado como candidato a presidente.

Menem extendió y perfeccionó su estrategia en los meses siguientes, familiarizándose con propuestas neoliberales y estableciendo alianzas sólidas en privado con dirigentes de la Iglesia y oficiales de las FFAA, incluyendo a los "carapintadas". Sin embargo, en su discurso público, se dirigió al pueblo con un mensaje mesiánico y un despliegue escenográfico que enfatizaba su figura y prometía una "revolución productiva" y un "salario" como entrada a una tierra de promisión.

Eduardo Angeloz, gobernador de Córdoba y competidor de Menem, buscó capitalizar el temor ante el populismo de Menem. Se acercó a las propuestas neoliberales y prometió recortes en el gasto fiscal, simbolizados por un lápiz rojo listo para tachar los rubros innecesarios.

En agosto de 1988, el gobierno lanzó el plan económico "Primavera" con el objetivo de controlar la inflación de cara a las elecciones, evitando ajustes perjudiciales para la población. Se estableció el congelamiento de precios, salarios y tarifas, aceptado por los empresarios. Sin embargo, el plan fue rechazado por los sindicatos estatales. La negociación con entidades financieras externas se estancó, y los fondos prometidos fueron escasos. En cambio, los capitales especulativos aprovecharon las altas tasas de interés y el cambio fijo.

La situación se volvió explosiva y dependía completamente de la capacidad del gobierno para mantener la paridad cambiaria. En diciembre de 1988, coincidiendo con el alzamiento de Seineldín, se desató una grave crisis en el suministro de electricidad y luego ocurrió el asalto al cuartel de La Tablada. El Banco Mundial y el FMI limitaron sus créditos al gobierno argentino, lo que provocó un colapso económico.

El 6 de febrero de 1989, el gobierno anunció la devaluación del austral, lo que llevó al colapso de la economía. El dólar y los precios aumentaron rápidamente, desencadenando la hiperinflación, que devastó el valor del salario y la moneda, afectando la producción y circulación de bienes.

En el contexto de esa crisis, las elecciones del 14 de mayo de 1989 llevaron al Partido Justicialista a un contundente triunfo, consagrando a Carlos Menem como presidente.

Aunque la fecha prevista para el traspaso era el 10 de diciembre, la hiperinflación y la deteriorada situación económica llevaron a que Alfonsín renunciara a fines de mayo. La crisis había alcanzado tal magnitud que el traspaso de gobierno se adelantó al 9 de julio de 1989, seis meses antes del plazo constitucional. Este abrupto cambio marcó la inversión de la imagen de Alfonsín, que pasó de ser percibido como una expresión de regeneración a ser acusado de abandonar el gobierno y de incapacidad para gobernar.